



Real
Instituto
Elcano

de Estudios Internacionales y Estratégicos

UN PROBLEMA DE ELECCIÓN SOCIAL: LA REFORMA DEL ESTADO DE BIENESTAR EN EUROPA

Álvaro Espina

Documento de Trabajo (DT) N° 27/2004

17/05/2004

Un problema de elección social: La reforma del estado de bienestar en Europa

Álvaro Espina *

Introducción

Ulrich Beck (1986) define la sociedad actual en función del riesgo que es capaz de soportar con vistas a conseguir un mayor grado de libertad negativa y, alternativamente, de la seguridad que exige para sobrevivir, en orden a aumentar la libertad positiva. Como sucede en las operaciones de optimización bajo las técnicas de programación matemática –y en la viñeta de El Roto–, no hay forma de maximizar ambas a la vez, ya que esta última se encuentra asociada a un mayor o menor grado de dependencia –que El Roto convierte en una relación de sustitución pura y dura–. En la realidad social a lo más que cabe aspirar es a una opción *maximin*: minimizar la dependencia, una vez definido el grado de seguridad deseado, o maximizar la seguridad alcanzada, una vez predeterminado el grado requerido de libertad negativa o ausencia de dominación. En este tipo de sociedad la forma en que familia, Estado y mercado se reparten el riesgo social aparece como la cuestión sociológica fundamental –de ahí la denominación Estado de bienestar–.



El Roto, *El País*, 11/XII/2003.

Además, una proporción creciente de lo que pasadas formas de organización social consideraban forzoso, obligado o sometido a restricciones a la acción –interpretadas generalmente como las condiciones “naturales” de la existencia– venía determinada por un conjunto de circunstancias y percepciones de los agentes que eran propias de la primera fase de industrialización –la denominada “modernización simple”–, pero que la

* *Ministerio de Economía (Dirección General de Política Económica) y Universidad Complutense (Departamento de Sociología I)*

sociedad reflexiva actual considera reconfigurables y su legitimación permanentemente cuestionable (*ibid.*, p. 243). La principal de todas ellas, como veremos es el conjunto de limitaciones vitales que habían venido restringiendo la acción de la mujer, que Harriot Taylor Mill (HTM) identificó en 1851 como la consecuencia obligada de su sometimiento económico al varón. Un tipo de sometimiento socialmente construido, no vinculado directamente al mecanismo biológico de reproducción de la especie (Seiz-Pujol, 2000).

El obrero de producción fordista, con trayectoria vital ordenada y estandarizada fue el destinatario del sistema de bienestar de la posguerra, tal como lo define Gösta Esping-Andersen (1999). Cubrir su riesgo “de clase”, resolviendo la “cuestión obrera” pudo hacerse convirtiendo a los trabajadores en ciudadanos sociales. Con una estructura familiar encabezada por un sustentador principal y un ama de casa, el riesgo principal era que el varón perdiera el empleo, de modo que la principal política de bienestar fue la política keynesiana de pleno empleo. En 1950 la esperanza de vida media era 8 ó 10 años menor que la actual, lo que permitía al trabajador-tipo realizar 45 años de cotización, disfrutar de siete u ocho años de jubilación, siendo sobrevivido por su viuda otros 4 ó 5 años. Cubrir estos riesgos “de trayectoria vital” con seguros básicos de enfermedad –cuando la demanda de estos servicios todavía era escasamente elástica (1)–, de desempleo y pensiones de incapacidad, jubilación, orfandad y viudedad no fue actuarialmente demasiado problemático. Además, el denominado riesgo “intergeneracional” se diluía en la expectativa generalizada de que “a cada generación le iría mejor que a la anterior”.

Las tres modalidades, o mundos, del capitalismo del bienestar (Esping-Andersen, 1990) resolvieron y repartieron institucionalmente la cobertura de estos riesgos de forma diferente. En el sistema de bienestar liberal-anglosajón el Estado cubre sólo los riesgos inaceptables para una sociedad decente, definidos con carácter restrictivo, aunque universal, y sólo concede asistencia social tras comprobar los medios de vida e ingresos del beneficiario. El capitalismo de bienestar conservador-corporatista, o europeo continental, parte del principio de subsidiariedad y el Estado sólo interviene, para mantener el estatus del individuo, cuando fallan las instituciones más próximas a él (o sea, las “corporaciones” a que pertenece y la familia), con asistencia social igualmente sometida a la prueba de medios. En el capitalismo del bienestar socialdemócrata-nórdico, en cambio, fue el Estado quien cubrió todos los riesgos bajo el principio de universalización de las prestaciones a un nivel elevado, transformando incluso los sistemas de asistencia social tradicionales en derechos *erga omnes* y adoptando amplios programas de servicios sociales y de sostenimiento de ingresos para las mujeres trabajadoras.

El debate sociológico sobre la existencia o inexistencia de un “régimen mediterráneo de bienestar” caracterizado por la ausencia de una cobertura específica del riesgo de exclusión –o de una asistencia social mínima garantizada–, se está viendo desmentido por los hechos: todavía a finales de los años ochenta España era uno de los principales candidatos a rellenar la casilla de ese subtipo del Estado de bienestar continental, caracterizado por descargar aquel riesgo exclusivamente sobre la familia y la beneficencia.

En cambio, actualmente la densidad de la “última red” de protección social española puede considerarse situada en una posición intermedia entre las de Francia y el Reino Unido, consistiendo generalmente en rentas mínimas de inserción situadas en torno al 75% del SMI, junto a una red cada vez más tupida y en rápido desarrollo de servicios sociales suministrados por las Comunidades Autónomas, a las que el artículo 148.20 de la Constitución de 1978 atribuye las competencias de asistencia social, manteniendo el Estado un Plan de garantía de mínimos. Finalmente, los ayuntamientos complementan la malla de seguridad con ayudas de emergencia social “finalistas, no periódicas,

discrecionales y flexibles” de carácter extraordinario, como protección complementaria, sustitutiva o con el carácter de puente hacia otras prestaciones (Moreno, 2000).

Por lo que se refiere a las creencias sobre la justicia y a las actitudes respecto al nivel de solidaridad, Arts y Gelissen (2001) atribuyen también a la inmadurez del “régimen mediterráneo” y al bajo nivel cognitivo de la población su preferencia por garantizar un desmesurado nivel de solidaridad a través de las instituciones de bienestar, lo que resulta consistente con el superior valor atribuido a la igualdad respecto a la equidad. No es extraño, por eso, que a efectos prácticos y de contrastación empírica Andreß y Heien (2001) tampoco consideren relevante esta distinción. Estos autores contemplan en cambio el caso de Alemania oriental hasta la caída del muro de Berlín –junto a los otros países excomunistas– como una especie de tipo ideal puro del modelo socialdemócrata, con plena desmercantilización de la economía y socialización del riesgo.

Los múltiples estudios realizados durante el último cuatrienio muestran un considerable grado de convergencia entre los tres grandes regímenes de bienestar social: en el sistema continental se percibe una cierta tendencia a introducir programas de rentas mínimas y otras fórmulas de garantías sociales universalistas; el régimen anglosajón esta incorporando la selectividad y otorgando un mayor protagonismo a la familia, y el sistema nórdico ha introducido también durante el último decenio la selectividad en un número creciente de programas, aunque ningún país de este área haya dado entrada a la familia en la función de bienestar. Ha de tenerse en cuenta que en 2000 el 55,3% de los hijos suecos nacían fuera del matrimonio (frente al 19,4% en España).

El aspecto evolutivo más sobresaliente en el área continental –y especialmente en la mediterránea– durante el último cuarto del siglo XX consiste en la consolidación de estrategias racionales de comportamiento de los hogares, orientadas por la preferencia creciente de las mujeres hacia el empleo remunerado, lo que no siempre ha sido resultado del consenso en el seno del propio hogar, ya que la percepción por parte del varón del grado de emancipación vital que tal preferencia comporta para la mujer puede considerarse como la causa principal de violencia doméstica en nuestro tiempo, como vaticinó HTM (Seiz-Pujol, 2000). Hoy, son ya las Naciones Unidas (1993, 6) quienes reconocen...

“... que la violencia contra la mujer es la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre y a impedir el desarrollo integral de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que la mujer se ve confinada a una posición subordinada respecto al hombre.”

Pero no se trata sólo de violencia. Virginia Woolf construyó, en su novela *Mrs. Dalloway*, el retrato y el mundo de una mujer de la clase alta inglesa a comienzos de la primera posguerra del siglo XX, condensando en 24 horas de su vida cotidiana la inextricable red de decisiones que –a base de desarrollar una “capacidad extraordinaria, capacidad femenina” que le permitía “crear un mundo propio allí donde se encontrara”–, terminan atrapando a su personaje en el papel de “perfecta anfitriona” que le conduce a una vía muerta sin otra salida que el suicidio. También su amigo Peter Walsh llega a la conclusión de que “no hay en el mundo nada peor para las mujeres que el matrimonio” pues, “con el doble de facultades que su marido, Clarissa tenía que verlo todo a través de los ojos de Dalloway”, como le ocurre también a la protagonista de la reciente película de Icíar Bollaín, cuyo título (“Te doy mis ojos”) implica renuncia voluntaria.

Que el asunto no ha dejado de estar vigente desde entonces lo pone de manifiesto Michael Cunningham (1998) al construir en *Las Horas* una verdadera “comunidad

imaginada” entre la Woolf y sus lectoras angloamericanas a lo largo del siglo pasado, cuyo final constituye una vuelta al comienzo, como el del final de la novela, al replantear con toda rotundidad la tragedia de la mujer obligada a elegir entre su propia realización personal –el fin humanista por antonomasia– y la de sus hijos –fin, por antonomasia, de la especie–. Todo ello sirve a modo de recordatorio de que en la naturaleza evolutiva del grupo humano no todo es construcción social y cultural, como señala Steven Pinker (2002).

El dilema aparece con similar crudeza en el debate académico dentro del ámbito de la sociología de género. Catherine Hakim (2000, 2002) sitúa el campo de observación de su teoría de la preferencia precisamente en el “nuevo escenario” angloamericano, en donde la mujer disfrutaría hoy de un espacio de libertad de acción tal que su elección entre trabajo remunerado y trabajo doméstico vendría determinada principalmente por sus propias preferencias entre estilos de vida. En cambio, Susan McRae (2003) concluye que, a la hora de explicar la elección laboral de la mujer –y sobre todo, los resultados de la misma–, tan importante como las preferencias individuales, sin minusvalorar su relevancia, resulta el conjunto de restricciones que recaen diferencialmente sobre ambos sexos. En este caso la investigación empírica aplica el análisis longitudinal a una muestra representativa de casi 5.000 mujeres que dieron a luz en Gran Bretaña en 1988, simplificada a otra de 1500 económicamente activas durante el embarazo y que buscaron trabajo tras el mismo, a las que se entrevistó tres veces (en 1988, 1993 y 1999). La problemática sociométrica hace que la muestra –y el análisis– contenga sesgos hacia las madres que tuvieron su primer hijo en el año de partida y excluye, en cambio, a las mujeres que fueron madres los últimos quince años, pero no por ello los resultados dejan de ser concluyentes a la hora de establecer que el hecho determinante a la hora de sopesar las restricciones a la capacidad de elegir de estas mujeres provienen de la crianza de los hijos, sin que ello suponga negar que las madres que interrumpieron su carrera laboral “hicieron lo que quisieron hacer”, como afirma Hakim (2003), para quien “sólo existe un enlace débil entre las actitudes hacia la moral pública y el comportamiento [pues]... ningún factor contextual tiene un impacto uniforme, sino que difiere según grupos de preferencia”.

Cabría afirmar que también Mrs. Dalloway “hizo lo que quería hacer” –como lo han seguido y siguen haciendo sus compañeras de “comunidad imaginada”–, de modo que el debate sociológico puede resultar inacabable. Mientras tanto, el análisis socioeconómico empieza a interrogarse sobre la sostenibilidad a largo plazo de una economía que no es capaz de contabilizar el coste de reproducción de todos sus recursos. Existe ya un considerable grado de consenso acerca de la necesidad de contabilizar las economías y deseconomías externas –sobre todo para el medio ambiente– pero no en lo que relativo al coste íntegro y al trabajo de reproducción de los recursos humanos, lo que remite al análisis del sistema productivo doméstico en términos algo más complejos de los empleados por la escuela de la elección racional, considerando también la aportación y la distribución del trabajo no remunerado (García, 2003), sin el cual no puede evaluarse la racionalidad de las decisiones de los hogares en términos de bienestar. Por su parte, la demografía histórica ha puesto de manifiesto el papel crucial de la madre en la supervivencia y el bienestar de los hijos durante el proceso de desarrollo económico y de transición demográfica (Reher y González-Quirón, 2003), por lo que no puede sorprender que la opción por el trabajo remunerado haya sido el principal factor impulsor del cambio en las políticas europeas de bienestar durante la segunda mitad del siglo veinte, ya que tal opción resultaba inconsistente con la sobrecarga de trabajo doméstico en exclusiva sobre la mujer y su dedicación a la “asistencia social tradicional”, realizada en el seno de la propia familia.



Romeu, *El País*, 07/II/2004.

En el sur de Europa, durante la etapa de transición, en ausencia de instituciones adecuadas de bienestar, una y otra funciones han tenido que ser asumidas por la “supermujer meridional”, que se ha visto obligada –para hacerlo– a renunciar en muchos casos a la función reproductora, ya que el Estado sólo se hace cargo de una pequeña parte de los gastos anuales mínimos imputables a la crianza de los hijos: en España, aproximadamente un 25%. Este proceso se acumula al de prolongación de la coresidencia de muchos jóvenes en el domicilio familiar hasta la edad adulta, fenómeno generalmente condicionado por la flexibilidad del mercado de la vivienda (Ermisch y Di Salvo, 1997), pero especialmente relacionado en España con el desempleo juvenil, la prolongación de la escolarización y/o con la disponibilidad para aceptar puestos de trabajo con elevado grado de volatilidad, consecuencia de la segmentación del mercado de trabajo (Martínez-Granado y Ruiz-Castillo, 2002), y probablemente también con el elevado grado de altruismo hacia los hijos de las generaciones adultas, propio de una ideología fuertemente familiarista que desincentiva la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo, de acuerdo con el modelo construido por Lindbeck y Nyberg (2001).

El riesgo social se ha desplazando en nuestro tiempo desde las edades superiores hacia las edades más tempranas de las generaciones adultas debido también a la mayor inestabilidad familiar. El proceso de envejecimiento de la población ha invertido la relación actuarial en que se basó el equilibrio de los sistemas de pensiones, diseñados bajo el sistema de reparto con prestaciones definidas (*pay-as-you-go, defined benefits*). Corregir el problema actuarial exige aumentar a medio plazo la tasa de actividad femenina y de los jóvenes, y prolongar la edad de jubilación de los adultos; a largo plazo resulta imprescindible aumentar la fecundidad y los flujos migratorios, especialmente en el sur de Europa. Esto último ya viene ocurriendo desde 1995 (OCDE, 2004) (2), pero la adopción de una estrategia integrada de este tipo implica disminuir las barreras de salida de los ya instalados en el empleo (*insiders*) y moderar los niveles de protección, para repartir de forma más equitativa la seguridad en el empleo y la protección entre los de dentro y los de fuera (*outsiders*). Porque la evidencia empírica de once países europeos indica que la rígida regulación de protección del empleo en el sur de Europa es la responsable de la “trampa de la precariedad” y de la baja tasa de movilidad de los nuevos entrantes, que se ve duplicada en los países escandinavos, cuya legislación protectora –

mucho más ligera— favorece las oportunidades y la movilidad ascendente de los jóvenes (Gangl, 2003).



Peridis, *El País*, 9/III/2003

La conjunción de todos aquellos cambios explica que las familias muestren cada vez menor disposición a asumir por sí solas los costes -elevados y crecientes- de tener hijos, de modo que, en ausencia de ayuda externa, la fecundidad acabará estabilizándose muy por debajo del umbral de reposición demográfica, comprometiendo gravemente a largo plazo la sostenibilidad de todo el sistema de bienestar. Caben distintas fórmulas para que el Estado asuma colectivamente tales costes, pero lo que resulta incompatible con la minimización del riesgo de bienestar a medio y largo plazo es la pasividad.

La reforma propuesta por Esping-Andersen (2002) consiste en desfamiliarizar rápidamente el régimen de bienestar continental y en desregular los mercados de trabajo nórdicos para permitir la aparición de un mercado de “servicios a las familias” a precios razonables. En cambio, se pronuncia radicalmente en contra de las estrategias de reparto del trabajo, ya que, si no se reparte paralelamente el salario, estas medidas resultarían económicamente inviables, y tampoco considera realista repartir el salario. Frente a estas propuestas, Esping-Andersen propugna minimizar el riesgo de exclusión social maximizando la capacidad de integración a través del empleo –bajo múltiples formas– aprovechando el potencial de puestos de trabajo derivado de una demanda creciente de servicios familiares, fuertemente impulsada por una política adecuada de subsidios; subvencionando los salarios de los trabajadores menos cualificados; aumentando la oferta pública de servicios sociales para los hijos y las familias, y fomentando la aparición de un mercado de este tipo de servicios, liberalizando la regulación laboral.

Este trabajo se estructura en cuatro partes: la primera estudia el proceso de racionalización de las decisiones de fecundidad y su impacto sobre la evolución demográfica y de los mercados de trabajo a largo plazo en toda Europa, y especialmente en la Europa del Sur. La segunda analiza la relación entre la demanda de seguridad dirigida hacia los sistemas de bienestar social y la demanda de certeza dirigida hacia el sistema de producción de conocimiento en la sociedad “reflexiva”. Una y otra interactúan a la hora de diseñar la reforma del Estado de Bienestar y deliberar sobre ella, determinando un cierto proceso de convergencia, tanto en los modelos analíticos como

en las políticas propuestas. En la tercera parte se realiza un ejercicio de simulación del proceso de elección social sobre la reforma del Estado de Bienestar, siguiendo la pauta del teorema de la imposibilidad, de Kenneth Arrow. En la cuarta se hace una prognosis acerca de la dinámica futura, con equilibrio incierto, a partir de la inestabilidad actual. Finalmente, las conclusiones propugnan abrir un espacio de democracia deliberativa para minimizar la incertidumbre respecto a las grandes orientaciones de reforma de los sistemas de bienestar europeos.

1. La hipótesis de Easterlin y el comportamiento “racional” de los hogares

Para Beck el proceso de modernización social ha atravesado dos fases: la de “modernización de la tradición” y la de “sociedad reflexiva”. En el ámbito de la población y de la sociología del bienestar la primera fase permitió, por ejemplo, que fenómenos como la fecundidad y la mortalidad “naturales”, que operaban anteriormente como consecuencias no queridas de la interacción entre pautas culturales de larga duración y cambios exógenos –del medio ambiente o del mercado–, pasaran a convertirse en decisiones sociales conscientes (racionales), a medida que el conocimiento de las causas que inciden sobre ellas permitió controlar, primero, la mortalidad mediante la acción pública –y la educación–, ampliando enseguida la capacidad de decisión de las parejas para ajustar la fecundidad a esa caída persistente de la mortalidad, en orden a conseguir el número deseado de hijos supervivientes.

Este proceso, conocido como la teoría de la transición demográfica, fue explicado por Richard Easterlin (1985) en términos estrictos de oferta y demanda familiar: en el mundo moderno los hijos dejaron de representar un activo para las familias (bajo la forma tradicional de inversión en capital humano para la economía doméstica, y de seguro para la vejez de los padres); además, el alargamiento de la etapa de aprendizaje y el crecimiento de los gastos en educación significaron una carga económica creciente, que las familias sólo soportan en la medida en que el menor número de hijos convierte a éstos en objeto de afecto y disfrute para los padres. En suma, la modernización de la fecundidad significó el cambio de un comportamiento dominado por las fuerzas de la oferta (la fecundidad “natural”) a otro dominado por la demanda consciente de un bien de disfrute superior, analizable en términos de la teoría de la elección de los hogares.

En realidad, la “hipótesis de Easterlin” no es otra cosa que la aplicación de la teoría del cambio de preferencias al comportamiento reproductor de los hogares. En síntesis, la hipótesis postula que las pautas de natalidad de las parejas se deciden de acuerdo con su *status* económico “relativo” –establecido por comparación entre sus ingresos al acceder a la situación profesional y los ingresos esperados (Easterlin & Macunovich, 1997)–. Como en la etapa en que se formuló la demanda de trabajo había estado creciendo de manera casi constante y permanente, la hipótesis de Easterlin significa que el tamaño relativo de cada cohorte demográfica determina la oferta diferida de fuerza de trabajo, su éxito relativo en el mercado y el nivel de fecundidad deseado, que resulta, pues, inversamente proporcional al tamaño de la cohorte. Toda perturbación demográfica genera una serie de fluctuaciones periódicas en el tamaño relativo de las cohortes de nacimientos: las generaciones mermadas de Norteamérica durante la primera posguerra tuvieron éxito y muchos hijos, lo que explica el *baby boom* de los sesenta; éstos vieron frustradas sus expectativas profesionales y redujeron su fecundidad, lo que explica el *baby bust* de los ochenta.

La hipótesis de Easterlin puede considerarse como un aspecto de la generalización del programa de investigación sobre economía del trabajo diseñado por Gary Becker en 1964, según el cuál la oferta de trabajo cualificado no es una simple consecuencia imprevista de acciones culturalmente determinadas, sino el resultado de decisiones de inversión orientadas por el criterio racional –típicamente “moderno”– de optimización de

las cualificaciones en los mercados de trabajo profesionales. Partiendo de esta hipótesis, Richard Freeman (1971) analizó el funcionamiento del mercado de trabajo de los titulados universitarios y pudo formular conclusiones prácticas bastante similares a las de Easterlin –algo anteriores a las de éste, aunque todavía no contasen con el refinamiento de los ingresos relativos, ni se combinasen con la teoría de formación de preferencias–. En síntesis, Freeman observó que las condiciones de escasez o abundancia relativa de titulados respecto a su demanda originan decisiones de educación que sobrepasan el nivel de equilibrio por causa del desfase entre el momento en que se adoptan tales decisiones y el de la llegada al mercado de las correspondientes cohortes. Este desfase induce un comportamiento en forma de telaraña –como el que se observa en otros muchos mercados– que es el responsable de aquellas fluctuaciones.

Sin embargo, admitir que el capital humano constituye una inversión realizada por los individuos con vistas a apropiarse de su rendimiento futuro en el mercado –como si se tratase de otras formas de capital–, no predetermina el tipo de políticas públicas que hayan de realizarse en ese ámbito, como piensa mucha gente. En concreto, si la creación de ideas, su difusión y su materialización en nuevas técnicas y modos de hacer las cosas produce beneficios sociales superiores a los que se apropian quienes participan en tales procesos, una forma de fomentar la aparición de este tipo de beneficios consistirá en subvencionar la formación y la inversión en educación, abaratando la producción de recursos humanos, con vistas a reducir también su remuneración en el mercado de trabajo, lo que inducirá a empresas e instituciones a aumentar su esfuerzo en investigación –al reducir el coste de ésta–, impulsando la innovación y el crecimiento económico (Romer, 1999), cualquiera que sea su efecto sobre la distribución relativa de los ingresos entre la población.

Ciertamente la evidencia empírica muestra que estas políticas sólo han reducido las diferencias de ingresos en Escandinavia, en donde se han insertado en un amplio sistema de bienestar y de regulación del mercado de trabajo (Freeman *et alia*, 1997). En cambio, la desigualdad ha aumentado en EEUU (Acemoglu, 1999), país en el que la generalización de la enseñanza universitaria a partir de la última posguerra puede considerarse prácticamente como la única medida universalista del Estado de Bienestar (Drucker, 1986), pero en donde la desregulación del mercado de trabajo y la fluidez inmigratoria frena cualquier subida de salarios entre los trabajadores menos cualificados, de modo que la “nueva desigualdad” sólo podría reducirse adoptando políticas de bienestar, como las elaboradas por Freeman (1996/7 y 2001).

El comportamiento reproductor de las parejas –o, más bien, de las mujeres– españolas e italianas durante el último cuarto del siglo XX constituye la demostración más acabada de la hipótesis de Easterlin en su versión ampliada, que implica considerar no sólo la oferta, sino también la demanda de trabajo. En síntesis, el número medio de hijos por mujer pasó en España (y Portugal) desde casi tres a comienzos de los setenta a dos a comienzos de los ochenta, y en Italia de 2,5 a 1,5. En el caso español (3), se trató de una respuesta a la crisis económica absolutamente acorde con las pautas propias de la sociedad reflexiva, que persigue controlar el riesgo anticipando los cambios de comportamiento a la evolución previsible de los acontecimientos, a la luz del conocimiento sobre las regularidades observadas, sin esperar a que éstos se produzcan (Beck, 1986).

En efecto, en 1975-76 se observó un claro empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo y aumentó el desempleo por primera vez en muchos años, rompiendo con ello las expectativas de mejora del bienestar familiar asociadas a un mercado de trabajo en el que había venido registrándose una tendencia creciente de la demanda, en coincidencia con una oferta limitada por el escaso tamaño –aunque creciente– de las cohortes poco numerosas de la posguerra, condiciones que habían

permitido alcanzar el pleno empleo de los hombres e iniciar un rápido movimiento de ascenso de la tasa de actividad de las mujeres –extremadamente baja, en términos comparativos–; todo ello combinado con un rápido crecimiento salarial, que estaba a punto de recuperar el atraso relativo acumulado durante los cien años anteriores con relación a la pauta histórica de crecimiento de los salarios en Inglaterra (Espina 2001).

Los primeros síntomas de crisis coincidieron, sin embargo, con la llegada a la edad laboral de las primeras cohortes del *baby boom*, pero no hubo que esperar tan siquiera a que éstas empezasen a reproducirse –como postula la hipótesis de Easterlin–, porque las mujeres del grupo de edad entre 20 y 24 años redujeron su tasa específica de fecundidad desde el 14% en 1976 al 11% en 1980 –y las de 25 a 29 años, desde el 19% al 14%, al mismo tiempo que las mujeres menores de 25 años y las mayores de 40 iniciaban ese mismo año un fuerte movimiento de desánimo respecto al mercado de trabajo, en paralelo con la posposición de la formación de parejas, que condujo a una reducción del 40% en el índice anual de nupcialidad (Fernández Cordón, 1986). En el mercado de trabajo, el desánimo se reflejó en una brusca interrupción de la tendencia fuertemente creciente que venía experimentando la tasa global de actividad femenina, que no volvería a recuperarse hasta la primera mitad de los años ochenta.

El brusco deterioro de la situación del empleo no sólo mermó las expectativas de mejora de *status* de las parejas, sino que disminuyó la posibilidad de compensar con ingresos femeninos la pérdida de salarios derivada del desempleo de los hombres adultos, que eran por entonces los sustentadores principales de la mayoría de los hogares –y siguen siéndolo actualmente, aunque en menor medida, debido al fuerte descenso de las tasas de actividad de los mayores de 50 años, acelerado también por la crisis y sólo detenido durante el último decenio del siglo pasado. Como consecuencia de este drástico cambio de status económico y de expectativas, el comportamiento reproductor de las parejas cambió de forma inmediata y las mujeres españolas iniciaron el proceso de reducción del número medio de hijos por mujer –medido por el índice sintético de fecundidad– más rápido y profundo de cuantos conocemos, manteniéndola en niveles mínimos (4) –muy por debajo de la reposición generacional– durante el cuarto de siglo en que las tasas de desempleo españolas superaron ampliamente las del entorno circundante (5) –que es el que orienta la formación de preferencias y expectativas de nivel de vida– hasta situarse, junto a las italianas, en los niveles más bajos históricamente verificados.

En el ámbito del bienestar relacionado con la familia y la fecundidad, Francia se ha diferenciado tradicionalmente respecto del área mediterránea –por razones relacionadas históricamente con la rivalidad franco alemana–, aplicando un criterio de bienestar familiar próximo al universalista, facilitando a las parejas una considerable densidad de servicios y, sobre todo, concediéndoles las prestaciones económicas por hijo dependiente más elevadas de Europa, con el resultado de unos indicadores de fecundidad alineados con la media europea. Un comportamiento tan “racional” como el de las mujeres españolas e italianas se registró también en los países nórdicos, pero en este caso el resultado ha sido un indicador de fecundidad relativa máximo en el área europea, porque durante el último cuarto de siglo Escandinavia practicó una política de máxima densidad de servicios sociales, que permitieron “desfamiliarizar” o colectivizar las necesidades de la familia, externalizando generosamente sus costes –tanto profesionales, para las mujeres, como económicos– e introduciendo incluso un cierto sesgo favorable para la mujer, que respondió racionalmente a tales políticas.

Sin embargo, la evaluación externa de la política de desfamiliarización llevada a cabo en Suecia resulta particularmente conflictiva. Según Rosen (1997), el 50% del gasto sueco en sostener a las madres trabajadoras resulta improductivo. Esping-Andersen cuestiona esta estimación porque considera –de acuerdo con la justificación oficial– que tal pérdida no es otra cosa que la inversión necesaria para mantener la capacidad permanente de

ingresos de las mujeres, ya que los cálculos disponibles indican que tal inversión compensa el deterioro de la renta permanente que se derivaría de la ausencia prolongada de la mujer del mercado de trabajo. Sin embargo, lo que Rosen trata de medir –utilizando para ello los mejores instrumentos metodológicos disponibles en economía de bienestar de los hogares– es el coste marginal de la oferta de servicios de cuidado de niños, para relacionarlo con el aumento de bienestar derivado del mismo –y con el aumento de impuestos necesario para financiarlos–, de acuerdo con las preferencias reveladas a través del comportamiento de las propias mujeres –y no necesariamente de las preferencias expresadas, aunque éstas tengan también gran relevancia desde el punto de vista sociológico (Easterlin a Macunovich, 1997)–. De ahí que las conclusiones de Rosen, aun siendo críticas, resulten difícilmente cuestionables: la oferta superabundante de estos servicios en Suecia –con el consiguiente coste fiscal– inducía, hasta su reforma, a un consumo aproximadamente doble del que se habría producido si tales servicios se hubiesen proporcionado por el mercado reduciéndose paralelamente la carga fiscal. Esta respuesta resulta perfectamente coherente con la lógica del mercado.

Además, el uso desproporcionado de servicios familiares externos permitía a las mujeres suecas participar en actividades de economía sumergida dentro de los hogares o, –empleando el eufemismo utilizado por el propio Rosen– “... en la producción de utilidad bajo modalidades que no tienen que compartirse con los demás”. *De facto*, este es un mecanismo de evasión fiscal -de *monetización* de la familia, afirma Rosen sin eufemismos. Es esto lo que explica la macrocefalia tradicional de la economía doméstica sueca en sus dos segmentos (el de oferta de servicios sociales externos, y el de economía doméstica sumergida, o “utilidad no compartida”). Todo ello aumentaba el peso muerto burocrático y reducía el producto social y el nivel de vida de la población, aunque elevase de forma ficticia la magnitud del PIB, al igual que se observó en los países del socialismo de Estado (6).

Esto es, las distorsiones provocadas por la voracidad prácticamente confiscatoria del sistema fiscal sueco de los años ochenta y comienzos de los noventa afectaban prácticamente al conjunto de las decisiones de las empresas y los hogares (Norrman y Mclure, 1997). De todos estos estudios puede inferirse que los hogares suecos trataban de cobrarse en especie –demandando servicios de bienestar en exceso, por relación a sus preferencias reales– la sobrecarga fiscal que les venía impuesta, y todo ello resultaba económicamente ineficiente. Eso es lo que la reforma fiscal y del Estado de bienestar de los noventa ha pretendido optimizar. El estudio de Rosen se ha visto ratificado por la reacción en el comportamiento de las mujeres suecas hacia el mercado de trabajo que siguió a aquellas reformas: durante el decenio de los noventa la tasa sueca de actividad femenina entre 15 y 64 años –que había llegado a situarse en el 83% en 1990 (en el 80,9%, según la OCDE)– descendió casi diez puntos porcentuales hasta 1998 (6,7 puntos, según la OCDE), fruto de un arreglo más eficiente entre los incentivos y desincentivos contrapuestos provenientes del mercado y del sistema de bienestar (Lindbeck, 2003b). Según las estimaciones de Esping-Andersen, la elasticidad del empleo femenino respecto a los subsidios para las madres que trabajan es unitaria, de modo que aquella caída de la tasa habría sido la respuesta a un descenso de entre el siete y el diez por ciento en tales subsidios. Durante 2003, además, el recorrido de las fluctuaciones de la tasa a lo largo del año fue de 4,6 puntos (4,3 en el caso de los hombres).

Pese a la reciente corrección de tales políticas y al repliegue de las tasas de actividad de los años noventa, según la Encuesta de Fuerza de Trabajo de Eurostat en 2002 la tasa sueca de actividad de la población femenina total era todavía un 37% superior a la de España y un 52% superior a la de Italia, lo que implica que los resultados beneficiosos de una política no necesitan justificarse extrapolando *ad infinitum* (o sea, universalizando) los principios en que se basa. Este es el riesgo que se corre cuando se trabaja con “tipos

ideales”, por mucho que la belleza y la elegancia formal de la realidad resulte muy inferior a la de cualquier tipo de modelos. A la vista de la abundante evidencia empírica hoy disponible, parece claro que la respuesta frente a la crisis del empleo y la aceleración de los cambios estructurales fue tan desproporcionada en el área nórdica como en el área continental de la Europa del bienestar, aunque una y otra actuaran en sentido contrapuesto.

En cualquier caso, el papel crucial del empleo en el sistema nórdico de bienestar se sitúa por encima de todas estas circunstancias coyunturales, y se refleja en el fuerte compromiso individual con el empleo (y de orientación hacia el trabajo) de la mayoría de la población, que resulta muy superior al de los otros dos regímenes, en los que se detecta, más bien, un elevado compromiso con las organizaciones –o sea, lealtad hacia las estructuras empresariales que proporcionan el trabajo remunerado (Hull y Svallfors, 2002)–.

2. Estado de bienestar y sociedad del riesgo ¿hacia una convergencia?

Ya observamos que tanto en el ámbito de la fecundidad como en el de las inversiones en capital humano es posible formular políticas bastante similares partiendo de modelos analíticos divergentes. De la hipótesis de Easterlin se infiere la conveniencia de políticas de fomento de la fecundidad que reduzcan el coste de atención, sustento y educación de los hijos, en función del tamaño de la familia, a través de subvenciones, servicios o impuestos negativos. Estas políticas no son muy diferentes de las propugnadas por Gösta Esping-Andersen, basándose, sin embargo, uno y otro en supuestos teóricos divergentes: la teoría de los “recursos del poder” de Korpi (1978 y 1998), en el caso de este último, y la generalización de su tesis, en el caso de Easterlin (1996), según la cuál la aspiración a colmar expectativas de bienestar relativo continuamente crecientes viene a ser la “noria hedónica” de un crecimiento económico que se apoya sobre tres pilares: la ciencia, la tecnología y la educación (p. 153).

En el primer caso se enfatiza el comportamiento solidario, el objetivo de reducir la segmentación de los mercados de trabajo, y la oportunidad de emplear la política de bienestar como recurso de poder, optimizando la distribución y fortaleciendo una coalición de beneficiarios que la apoye. En el otro, se hace énfasis en el carácter universalista, aunque utilitarista y hedonista, de esa misma política y en las consecuencias beneficiosas para la sostenibilidad del crecimiento, el progreso y el bienestar de cada país, con carácter indivisible para toda la población, lo que implica adoptar un enfoque sociológico “pluralista”. Ahora bien, lo que importa verdaderamente de este último enfoque es que dota a la política de bienestar de mayor estabilidad que la primera, haciéndola susceptible de incorporarse a programas de consenso multipartidario, capaces de minimizar el riesgo político a largo plazo.

Fundamentar políticas a partir de la confluencia de análisis contrapuestos desde el punto de vista epistemológico disminuye el riesgo de perspectivismo, porque el método científico comúnmente admitido implica que la reproducción y validación recíproca de resultados constituye la mejor prueba, tanto de la existencia de un problema real, como de la racionalidad de los instrumentos óptimos para analizarlo y resolverlo. Por ejemplo, frente al modelo neoclásico de economía de la educación, en el modelo de Akerlof y Kranton (2002) los resultados de la escolarización dependen de la identidad del estudiante –que plantea una demanda de reconocimiento típicamente weberiana– a la que la escuela debe hacer frente con estrategias adecuadas. De este modo, a partir de un modelo anclado en el más puro individualismo metodológico, Akerlof es capaz de reencontrar toda la sociología, porque la función de utilidad del estudiante no es pecuniaria, como en Becker, sino que persigue el “reconocimiento de su identidad” (individual, y/o colectiva, construida culturalmente), salvando con ello la trampa de la

“identidad natural” en la que permanece la escuela de la elección racional, que Parsons puso en evidencia ya en 1937 al definir la *Estructura de la acción social* (Alexander, 1992). Nótese que la multiculturalidad (omnipresente desde siempre en América) que la inmigración está introduciendo en la escuela española –y en todo el sistema de bienestar– hacen de este modelo una herramienta imprescindible para el análisis.

En general, el contraste de los resultados obtenidos a partir de los distintos enfoques analíticos permite minimizar el riesgo asociado a la adopción de las políticas estructurales, que son aquellas que comprometen de forma irreversible recursos y sistemas de regulación a largo plazo, lo que resulta especialmente indicado en un terreno, como el del Estado de Bienestar, en el que el principal foco de riesgos proviene del propio sistema político, por cuanto los cambios de orientación en este tipo de políticas –o de los parámetros empleados para aplicarlas– sin la adecuada anticipación impiden a los hogares adoptar tempestivamente decisiones que, para resultar congruentes –de acuerdo con la teoría del ciclo vital del ahorro, de Modigliani y Brumberg–, deben afectar a la biografía completa de los individuos, lo que exige dilatados períodos de adaptación (Lindbeck, 2003a). Esto es, los regímenes de bienestar dependen como ningún otro ámbito político de sus trayectorias históricas.

Las reglas y el alcance temporal del riesgo social vienen definidas por el objeto de cada política. En el ámbito del bienestar, el período cuatrienal del ciclo político resulta irrelevante, de modo que minimizar el riesgo político constituye la política de bienestar por excelencia, una vez demostrada la falacia de que el gobierno constituye la mejor garantía contra ese fallo del mercado (Persson, 2000). Esa es la razón de que la búsqueda de consenso no sea aquí un mero procedimiento o método de trabajo, sino un fin en sí mismo, precisamente porque las fórmulas de democracia deliberativa –en su modalidad más fuerte, con persuasión completa, o democracia consociativa– constituyen el mejor modo de maximizar la estabilidad de las políticas adoptadas. Probablemente es eso lo que se esconde en la persistencia a largo plazo de pautas de enorme estabilidad observadas por Esping-Andersen en sus “tres mundos” del Estado de bienestar y lo que explica los esfuerzos desplegados durante el último decenio por las distintas escuelas de análisis en las diferentes áreas de conocimiento de las ciencias sociales para encontrar esquemas analíticos y métodos de diseño de políticas contrastables por las demás escuelas –o basadas en el *benchmarking* respecto a las “mejores prácticas” de *policy/making* (Espina, 1996)– en busca de plataformas de entendimiento y colaboración demandadas imperativamente por un votante medio extremadamente exigente respecto a los criterios de reflexividad aplicados a la minimización del riesgo en un ámbito que considera fundamental para su existencia y forma de vida.

Indirectamente, este esfuerzo colectivo ha reforzado la apariencia de unanimismo (que a veces se confunde con el modelo neoliberal de “pensamiento único”), y ha propiciado en algunos casos la vuelta a unas prácticas neocorporatistas que todavía a comienzos del decenio parecían condenadas al minimalismo, la disgregación o la “devolución mesocorporatista” (Espina, 1991). En España, esta aspiración consociativa se tradujo en la aprobación por unanimidad en el Parlamento del denominado Pacto de Toledo (7), cuyas cláusulas se incorporarían más tarde a la concertación social tripartita. No se detuvo aquí el esfuerzo de búsqueda de estabilidad y consenso, sino que en el ámbito de la Unión Europea se ha desarrollado un proyecto conjunto de análisis e investigación sin precedentes (8), en paralelo con la puesta en marcha de un esquema de colaboración entre Estados miembros que sólo tiene formalmente carácter intergubernamental, pero que todos han considerado conveniente asumir, dando pie a la adopción del llamado “Enfoque de Luxemburgo” (Diagrama I), en materia de política de empleo, y al “Método abierto de coordinación y vigilancia de las políticas de pensiones” (Diagrama II).

Dado el principio de subsidiariedad en la distribución de competencias del Tratado de la Unión, en estos ámbitos se aplica muy raramente el procedimiento normativo ordinario de las Directivas –cuya incorporación al derecho interno de los Estados se ha venido viendo obstaculizada, más que por los intereses propios de cada país, por sus capacidades y el juego interno de las variables institucionales (Linos, 2004)–. En este caso se trata de procedimientos de colaboración voluntaria, pero que someten a las políticas nacionales a monitorización permanente y a una cierta “presión entre iguales” (*peer pressure*). Y es que el contexto de globalización ha hecho que muchas de las políticas que anteriormente se consideraban sostenibles “en un sólo país” hayan dejado de serlo, y que sólo dispongan de ciertas probabilidades de permanencia en caso de ser practicadas a escala continental, a la vista de la recalcitrante negativa norteamericana a elevar sus umbrales de bienestar –y de coste fiscal para empresas y familias– y del carácter cada vez más abierto de la competencia económica internacional y de los movimientos de capitales para inversión o de emigración de trabajadores. Europa ha apostado por que el Estado de bienestar será posible también en este nuevo contexto, pero para que la apuesta tenga probabilidades de ganar la Unión Europea necesita elevar también su capacidad de influencia en los foros emergentes de gobierno mundial, lo que remite de nuevo a la necesidad de reforzar los lazos de unión y de cohesión interna. Además, la futura ampliación provocará nuevos movimientos migratorios, cuya integración planteará probablemente la necesidad de armonizar la política de redes básicas de protección (Boeri, 2002).

Esa apuesta europea es signo de la proverbial aversión hacia el riesgo cultivada en el continente a lo largo del tortuoso siglo XX, que hizo emerger una aspiración firme y persistente a integrar el núcleo esencial del sistema de bienestar en la “estructura básica” de las sociedades europeas; esto es, dentro del modo “en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social” objeto fundamental de la justicia (Rawls, 1971, p. 23). No podía ser de otro modo, por cuanto en la sociedad reflexiva el riesgo más temible es precisamente aquél que emana de la aplicación del conocimiento a la resolución de los problemas sociales y contra este tipo de riesgo no basta la garantía centralizada, autoritaria y burocrática del sistema político (Beck, 1986, *in fine*), fuente él mismo de un rango de riesgos a largo plazo prácticamente inapelables en democracia. Porque el sistema democrático está sometido, por definición, al mayor grado de contestabilidad –como los mismos conceptos de la teoría política–, de la que sólo se excluyen de forma duradera en la práctica los elementos considerados constitucionales. Por eso mismo, apoyar las decisiones sociales de más largo alcance sobre análisis llevados a cabo desde escuelas, métodos y tradiciones intelectuales antagonistas –siendo éste el tipo de conocimiento menos contestable en la sociedad reflexiva–, refuerza el fundamento central de la sociedad liberal, que no es otro que el “consenso por solapamiento” acerca de la concepción moral y de valores expresamente elaborada y aplicada a la “estructura básica de la sociedad”, única capaz de ofrecer una probabilidad razonable de sobrevivir a la sucesión de generaciones (Rawls, 1989).

A esa misma conclusión podemos llegar analizando el binomio precariedad/seguridad en materia de regulación del mercado de trabajo. El asunto es cualquier cosa menos trivial. Es bien conocido que en el sistema estructural-funcional de Parsons (1961) el subsistema económico cumple precisamente el imperativo de adaptación del sistema social a las circunstancias cambiantes y a los *shocks* externos, en ausencia de la cuál se ve imposibilitado para cumplir sus fines, tanto colectivos –definidos por el sistema político– como individuales –definidos en el ámbito del sistema de mantenimiento del patrón, o cultural-familiar, y materializados por los hogares a través del mercado–. Regulación significa, por definición, introducir un cierto grado de rigidez estructural en los comportamientos de las unidades individuales de decisión social –empresarial, en este caso–, que proporciona como contrapartida un cierto grado de seguridad en los

individuos que forman parte de la misma -en este caso, los trabajadores y la población dependiente de los hogares.

El problema a dilucidar consiste en determinar el grado de rigidez regulatoria que restringe hasta tal punto la capacidad de adaptación de las unidades económicas que llega a neutralizar sus efectos beneficiosos –la mayor seguridad en la posición de los individuos dentro de la empresa–, como consecuencia de la mayor ineficiencia económica, que conduce a la pérdida de empleos, o de la reducción del potencial de crecimiento y de creación de empleo. En su versión mas nociva, el exceso de carga reguladora puede resultar tan evidente que los propios beneficiarios subjetivos perciban el riesgo de destrucción o deterioro de la empresa –y de inestabilidad personal–, aceptando renunciar a parte de la seguridad nominal que proporciona la regulación para reducir aquel riesgo, como sucedió en Norteamérica durante la Depresión de los años treinta (Doeringer-Piore, 1971), y fue asumido también por los sindicatos nórdicos (Esping-Andersen, 1999).

Pero esta percepción se desdibuja cuando existen mercados internos de trabajo en las empresas, barreras de entrada y segmentación del mercado de trabajo, que producen una distribución asimétrica del riesgo y de los beneficios de la regulación, haciendo recaer el riesgo derivado de la ineficiencia sobre un colectivo determinado (externos, u *outsiders*) y los beneficios de la seguridad sobre otro (internos, o *insiders*), ya que, mientras éste último grupo sea mayoritario, demandará el mantenimiento de la regulación y rechazará cualquier forma de consenso para modificarla, aunque del cambio pudieran derivarse consecuencias “globalmente beneficiosas”, por igualitarias (en el sentido de Rawls), lo que no garantiza, sin embargo, que reúnan las condiciones equitativas del óptimo de Pareto (que alguien mejore y nadie empeore). En el caso de España, además, la regulación de la contratación laboral introducida a mediados de los ochenta permitió la rápida formación de un segmento de empleo temporal –equivalente a un tercio del mercado de trabajo–, cuya aparición proporcionó un “colchón de flexibilidad” a las empresas y reforzó la capacidad para desarrollar estrategias de maximización de la “rentas derivadas del empleo” del segmento de trabajadores fijos hasta la llegada de la crisis de comienzos de los noventa (Polavieja, 2003), que coincidió con la formación del Mercado Único. Los efectos perversos de la política de flexibilidad marginal fueron también considerables en Francia (Blanchard, 2002) y son propios de las economías europeas con bajo crecimiento y fuertes rentas derivadas del proceso de formación de salarios, de modo que la estrategia de flexibilidad marginal resulta ser la única viable –desde la perspectiva de la economía política– en períodos de bajo crecimiento, mientras que la legitimación política para introducir flexibilidad sólo emerge en los períodos de crecimiento rápido (Saint Paul, 2002).

En el contexto competitivo de la UEM la centralización de la negociación salarial y organizativa sectorial a escala estatal conlleva costes de transacción desmesurados. Esto explica que durante los años noventa desapareciera la relación positiva entre estructura negociadora y resultados macroeconómicos observada durante los dos decenios anteriores, lo que condujo a descentralizar el sistema salarial (Flanagan, 1999, pp. 1170-1171). Con carácter más general, la integración europea impulsa igualmente la descentralización de los mecanismos de financiación del sistema de bienestar (Andersen, 2003). En parte, todo ello es consecuencia de la tendencia hacia la igualación del coste de los factores de producción inherente a todo proceso de integración de los mercados de productos y servicios (Andersen *et alia*, 2000), pero concuerda específicamente con las previsiones acerca del impacto de la eliminación de aranceles sobre el poder monopolista de los sindicatos realizadas a partir de los modelos teóricos desarrollados por Driffill y Van der Ploeg (1993). En paralelo con la integración de mercados, el proceso se vio acompañado por la desregulación de los mercados de productos, la liberalización financiera y la privatización de empresas públicas. Las diferencias de comportamiento y

de eficiencia entre países dependieron en gran medida del proceso de aprendizaje llevado a acabo por los sindicatos y los otros sujetos de la acción colectiva (Blanchard, 2003).

En aquellas simulaciones, un contexto liberalizado proporciona las condiciones para una mayor apropiación del producto real por parte de los trabajadores sindicados o beneficiados por la regulación protectora del empleo –al igual que sucede en el análisis de Polavieja (2003)– y al mismo tiempo hace que los sistemas nacionales de negociación centralizada produzcan pérdida de eficiencia macroeconómica. Con carácter general, esta pérdida sólo podría evitarse a través de la cooperación sindical internacional, pero ni siquiera en el seno de la UE se perciben perspectivas de que tal cosa pueda ocurrir en un futuro previsible (Traxler, 2002), aunque el horizonte de restricción demográfica, pleno empleo y futura estrechez en el mercado de trabajo europeo puede hacerlas necesarias a largo plazo de cara a una adecuada coordinación entre la política monetaria del BCE y la negociación salarial. (Traxler, 2003b). En ausencia de ella, incluso los países en los que tradicionalmente las estructuras neocorporatistas dieron mejores resultados – básicamente los pequeños países de la antigua EFTA– han descentralizado sus estructuras de negociación, siguiendo los pasos del Reino Unido y Nueva Zelanda. Ello no obsta para que los acuerdos sectoriales subsistan, pero la evidencia comparativa observada en los sectores financiero y metalúrgico de cuatro países con sistemas de relaciones industriales tan diversos como Alemania, el Reino Unido, Italia y Bélgica indica que, en general, su dinámica se ha invertido: de obligar a las empresas a adaptar sus estructuras al acuerdo sectorial, es ahora éste el que se encarga de recoger la innovación emanada de los acuerdos de empresa, dando cabida a la diversificación (Marginson *et al.*, 2003).

Sin embargo, mientras en los dos países que avanzaron primero hacia la descentralización el proceso fue el resultado de la desregulación del sistema de relaciones industriales y de la reducción del poder de los sindicatos, en los países nórdicos –con la excepción de Noruega–, en Suiza y en Austria fueron las propias instituciones negociadoras centralizadas las que dieron paso a una forma de “delegación” vertical mediante la cuál las estructuras de empresa han ido asumiendo el principal papel en la negociación, manteniendo, sin embargo, las instancias centrales ciertas facultades de articulación, apoyadas en una regulación estatal favorable (Traxler, 2003a). Porque lo que determina la capacidad de control del crecimiento salarial y la eficiencia de las instituciones laborales en todo el área de la OCDE no es tanto la descentralización –y mucho menos la desintegración del sistema de relaciones laborales– como la articulación de la negociación y su coordinación con el proceso macroeconómico (Traxler *et alia*, 2001).

En ausencia del tipo de autolimitación, voluntariamente asumida por los agentes, observada en el caso nórdico, la única alternativa disponible en la Inglaterra anterior al thatcherismo consistió en el dismantelamiento institucional. En general, las prácticas neocorporatistas de los años setenta, que intercambiaron autocontención salarial por contrapartidas políticas, se vio sustituido durante los ochenta y noventa por un tipo de pactos sociales en el que, como alternativa a la moderación de salarios, los gobiernos –enfrentados al imperativo de ajustar la economía a las condiciones del nuevo entorno competitivo– amenazaban con la aplicación de políticas monetarias restrictivas, sustituyendo la zanahoria por el palo, aunque este último lo empuñasen ahora unos bancos centrales considerablemente autónomos en la prosecución del objetivo de estabilidad de precios (Hassel, 2003).

3. La elección social en la sociedad de tres tercios

Las denominadas “sociedades de tres tercios” se encuentran sometidas a una versión

triangular del dilema del prisionero. Para tomar decisiones sociales en ellas hace falta realizar comparaciones interpersonales de utilidad, pero los criterios de comparación no necesariamente cuentan con apoyo democrático suficiente para formar una coalición victoriosa que pueda aplicarlas. Adoptando por un momento el “modelo agregativo” de razonamiento político, podemos echar mano del teorema de la imposibilidad de Arrow (1963) para simular el resultado del juego de preferencias de los grandes grupos sociales en los procesos de elección y decisión social que están teniendo lugar en la Europa continental a comienzos del siglo XXI.

Esping-Andersen ha sugerido que sus tres mundos del Estado de bienestar están poblados, no por un solo tipo de *homo economicus*, como en la economía clásica, sino por tres tipos ideales de *homines* (*homo liberalismus*, *homo familius* y *homo socialdemocraticus*), junto a sus correspondientes *feminae*. Para simplificar su discurso, el trío descrito por nuestro autor puede encarnarse en tres personajes histórico-literarios que ofrecen la cara amable de las figuras utilitarista, familiarista y altruista –con sus correspondientes contrapartidas violentas–:

- El primer *homo* puede encarnarse en *Philip Marlowe*, el detective privado de Los Ángeles, individualista, insubordinado y materialista, aunque capaz de llegar a ser altruista y sentimental, pero caso por caso –al modo pragmático– y a iniciativa propia. En nuestro tiempo el individualismo parece adoptar preferentemente la forma antipática del “conservador compasivo” (*compassionate conservative*) descrito por George W. Bush (9).
- El segundo bien podría encarnarlo *Don Fabrizio, Príncipe de Salina*, de *El Gatopardo*, que dirigió, protegió y preservó el patrimonio y el status de su familia siciliana a través de los avatares y los riesgos de la revolución nacional de Garibaldi. Su cara más violenta la ha dibujado en nuestro tiempo F.F. Coppola en *El Padrino*.
- Finalmente, el tercero podría encarnarlo *Baden Powell*, el oficial del imperio británico fundador del movimiento *boy scout*, que dejó dicho en su testamento: “mantente ‘siempre listo’ para vivir feliz y para morir feliz... y recuerda que la forma real de ser feliz es hacer feliz a los demás”. La cara hirsuta de este sociotipo es, obviamente, Lenin.

A los efectos de nuestro proceso de elección social bajo el paradigma agregativo, no cabe suponer que los países están poblados por un único sociotipo, sino por los tres, aunque los distintos regímenes de bienestar se caracterizan por composiciones que hacen prevalecer en cada uno de ellos al tipo que le es característico: *Marlowe* en el liberal, *Salina* en el conservador y *Powell* en el socialdemócrata. Por eso, en lo que sigue supondremos a la población de cada país distribuida en tres grupos de preferencias:

- (1) Los “*Marlowe*”, que en función de las ventajas –naturales y/o sociales– de que dispusieron en el punto de partida, de su posición competitiva y/o de su capacidad innovadora disfrutaban de privilegio de mercado por estar en posesión de una acumulación inexpugnable de recursos humanos individuales, capital físico –heredado o acumulado–, o de ciertas garantías inherentes a la democracia, por pertenecer al núcleo esencial del servicio público, con acceso al empleo por selección meritocrática y garantías constitucionales de inamovilidad. La estabilidad en la posición de status de este grupo persigue el objetivo funcional de retenerlos y evitar su abandono, para minimizar costes de búsqueda, sustitución y pérdidas de inversión en capital humano específico –dentro de los mercados internos de trabajo de las empresas–, o la formación de burocracias profesionales de elevada cualificación para evitar los inconvenientes del llamado “expolio político”, fuente de ineficiencia y de riesgos de clientelismo, cohecho y corrupción (*log-rolling*) en el sector público. El principio que legitima su posición es la eficiencia. Sus valores preferidos, la justicia y la libertad.

- (2) Los “*Salina*”, que disponen de condiciones de estabilidad similares a las del primer grupo, pero conseguidas en este caso a través del contrato, la convención y la regulación, adoptadas en respuesta a circunstancias económicas y sociales pasadas y/o como consecuencia de la utilización de su capacidad de negociación, basada en la acción colectiva. Los principios que legitiman su posición son la estabilidad, la gobernabilidad y la minimización del conflicto. Su valor preferido, la fraternidad corporativa –y la equidad, aunque aplicada de forma asimétrica–.
- (3) Existe un tercer grupo –con distribución bimodal–, que incluye por un lado a los que ocupan los puestos con menor nivel de cualificación y/u oferta superabundante, y, por otro, a los cualificados, pero sometidos a fuerte rotación en mercados especialmente volátiles o debido a la frecuencia de sus entradas y salidas de actividad. Su característica común es que ocupan la periferia de los modernos mercados de trabajo. Los primeros aspiraron probablemente alguna vez a convertirse en “*Salina*”, pero las fuertes barreras de entrada les han hecho perder la esperanza de llegar a serlo y su óptimo sería convertirse en “*Powell*”. Los segundos sueñan con ser “*Marlowe*”, pero en este selectivo grupo de meritócratas sólo cabría una minoría, de modo que su aspiración realista es también llegar a ser “*Powell*”. Los valores que proclaman todos ellos son la solidaridad y la igualdad de trato.

El grupo A (los “*Marlowe*”) prefiere un Estado de bienestar liberal [X], con escasa intervención gubernamental, en donde se pagan menos impuestos y se legitima la desigualdad del mercado de trabajo meritocrática, lo que refuerza la probabilidad de consolidar su status profesional a largo plazo –puesto que el capital humano se perfecciona con el uso, y la curva de demanda de trabajo altamente cualificado tiene pendiente positiva (Acemoglu, 2003)–. Como *second best* prefiere el estado de bienestar conservador [Y] de los “*Salina*”, porque es más barato que el de los “*Powell*” –de quienes detesta, además, su uniformismo igualitario–, y puede proporcionarle un colchón de protección de última instancia más elevado que el régimen socialdemócrata. Además, sus miembros se consideran con fuerzas suficientes para hacer presión corporativa, si fuera necesario, pasando a convertirse en *insiders*; finalmente, como individualistas que son, sus preferencias no incluyen cuestiones familiares.

El grupo B (“*Salina*”) es el protagonista de la sociedad industrial: sin poseer patrimonio con el que hacer frente a los riesgos vitales, disponiendo de recursos de cualificación y semicualificación que les proporcionan una capacidad competitiva intermedia en los distintos segmentos del mercado de recursos humanos, son corporativistas y constituyen el prototipo de trabajadores y familias para los que se diseñó el Estado de bienestar conservador de la Europa continental [Y], con fuertes barreras de entrada y de salida, garantismo en la regulación de los mercados internos de trabajo y elevados niveles de protección para los *insiders*. En caso de crisis de este modelo, su preferencia obvia sería el régimen socialdemócrata [Z], porque, aunque redujese la seguridad en el puesto de trabajo, mantendría niveles de protección inferiores al conservador pero suficientes, y asumiría los costes de la familia, que ahora corren a su cargo. Lo que rechaza definitivamente es el régimen liberal, [X], que procedería a desregular por completo el mercado de trabajo, obligándoles a competir en calidad con los *Marlowe* y en precio y flexibilidad con los *Powell*.



Máximo, *El País*, 16/1/2004.

El grupo C es el más heterogéneo y difícil de catalogar, pero, en general, la condición "Powell" del régimen socialdemócrata [Z] es la que mejor satisface sus aspiraciones: reducida segmentación, igualitarismo, posiciones intermedias de seguridad en el empleo y de protección; máxima autonomía de mujeres e hijos respecto de la familia, junto a máximas facilidades y apoyos para la vuelta al empleo y la recualificación durante las etapas de rotación, junto a fuertes redes de seguridad de última instancia. En principio, mientras su tamaño era reducido y predominaban los esquemas industriales y organizativos fordistas, la participación en los beneficios de la protección familiar y la elevada probabilidad percibida de convertirse en internos hizo que el *second best* de este grupo fuera el régimen conservador [Y], y aspirasen mayoritariamente a convertirse en "Salina" –pasando a ser cabezas de familia con plenos derechos–, o a extender a un segundo miembro de la familia esa misma condición, en el caso de las mujeres.



Forges, *El País*, 2/III/2004.

Pero en la medida en que este segmento terciario ha ido creciendo y haciéndose persistente, las expectativas de convertirse en *insiders* han ido disminuyendo, al mismo tiempo que el crecimiento del empleo del decenio de los noventa -asociado en parte a una menor regulación y a la disminución de la carga fiscal- ha reducido la rotación y los tiempos de espera, especialmente para los mejor capacitados, cuyo número ha aumentado considerablemente, en función de la elevada escolarización, junto al aprecio por la meritocracia, en paralelo con la mayor educación de los jóvenes y la mayor disponibilidad de políticas activas. No obstante, el aumento general del nivel educativo no sólo no garantiza mayor igualdad, sino que puede conducir a mayor desigualdad, porque aumenta la concurrencia y los requerimientos de cualificación exigidos, empeorando la posición de los menos cualificados (Acemoglu, 1999). En la medida en que se vaticinan dificultades de sostenibilidad de los sistemas de pensiones –que los jóvenes confirman, al observar sus propias pautas reproductoras–, mejora la aceptación de la opción de bienestar a través de una sola red de seguridad de última instancia (con pensiones mínimas), menor presión fiscal y fuerte desgravación de los planes individuales de pensiones privadas.

De modo que, en ausencia de reformas que refuercen la viabilidad de [Y] –lo que exigiría adoptar criterios de reforma que lo aproximasen a [Z]–, el *second best* del segmento mayoritario en el grupo C puede estar cambiando de [Y] a [X] (el de los *Marlowe*), ya que el régimen conservador se presenta ante ellos como el destinatario de las cotizaciones actuales –pero sin garantizar una adecuada contrapartida de continuidad para el sistema de reparto– y aparece también como el principal responsable de las barreras de entrada al núcleo primario del mercado de trabajo y de la mayor precariedad y las menores oportunidades de estabilidad que prevalecen en el segmento periférico del mercado en que se encuentran (Polavieja, 2003). Finalmente, el segmento de los excluidos y de los menos cualificados puede inclinarse también por *Marlowe*, si llega a convencerse de que una sociedad liberal “compasiva” se vería obligada a afrontar definitivamente el problema de la asistencia social moderna. Cabe pensar, en cualquier caso, que el peso de este segmento sobre el votante mediano resulta escaso, dada su escasa participación electoral.



Peridis, *El País*, 29/XII/2003.

Ahora podemos razonar en los términos del teorema de la imposibilidad de Arrow: *Marlowe* prefiere el régimen [X] al régimen [Y], y el régimen [Y] al régimen [Z]; *Salina* prefiere [Y] a [Z] y [Z] a [X], y, hasta ahora, *Powell* ha venido prefiriendo [Z] a [Y], e [Y] a [X]. Bajo estos supuestos, votaciones simultáneas regidas por la regla mayoritaria conducían en la Europa continental a resultados persistentes: en todo caso la opción [Y] era preferida a las otras dos opciones, y la opción [Z] preferida a la [X], lo que nos daba un cuadro jerárquico lógicamente consistente: $[Y] > [Z] > [X]$. Además, valorando con dos puntos la primera preferencia, con uno la segunda y con cero la tercera, [Y] recibiría una valoración 4, [Z] un valor 3 y [X] un valor dos. A esta situación la denominaremos “estado social uno”.

Ahora bien, si se estuviera produciendo el deslizamiento descrito más arriba, entonces *Marlowe* y *Salina* mantendrían sus preferencias, pero *Powell* cambiaría las suyas y preferiría [Z] a [X] y [X] a [Y]. En este caso, los resultados de votaciones simultáneas bajo la regla mayoritaria conducen a resultados inconsistentes: si se pregunta por la preferencia entre [X] e [Y], tendrá mayoría [X] (elegida por *Marlowe* y *Powell*); si entre [Y] y [Z], la tendrá [Y] (elegida por *Salina* y *Marlowe*) pero entre [Z] y [X] la tendrá [Z] (preferida por *Powell* y *Salina*), lo que viola la propiedad transitiva inherente a toda lógica de ordenación de preferencias dentro de un mismo colectivo, porque el cuadro jerárquico ha dejado de ser lógicamente consistente, ya que $[X] > [Y] > [Z] > [X]$, y las tres opciones quedan igualmente valoradas con tres puntos. A esta situación la denominaremos “estado social dos”.

Naturalmente, los *Marlowe*, los *Salina* o los *Powell* no surgen por generación espontánea ni viven en un espacio puramente cosmopolita, libres de la influencia que ejerce sobre su propio proceso de socialización el régimen de bienestar que les rodea. El modelo estructural de Andreß y Heien (2001) distingue cuatro determinantes de las actitudes de los individuos hacia el estado de bienestar: el interés individual; los valores y las normas, especialmente las creencias sobre la justicia; las diferencias en las pautas de socialización, y las culturas nacionales sobre el bienestar. En puridad, sólo el primero de ellos determina las preferencias de modo relativamente autónomo, a partir del cálculo

racional (*rational choice*), ya que los valores y normas se ven, a su vez, influenciados tanto por las peculiaridades del proceso de socialización –que en este modelo se encuentran asociadas a características del individuo tales como edad, género, nivel educativo, profesión y status laboral–, como por las modalidades de integración cultural en el seno de las correspondientes comunidades nacionales (religión, ideología e instituciones).

Frente al énfasis en el efecto de composición y agregación, “de abajo arriba”, propio del individualismo metodológico radical en que se ha basado tradicionalmente la escuela de la elección racional –por mucho que su metodología ofrezca posibilidades mucho más amplias, puestas en evidencia por Brennan (2001)–, la mayoría de las escuelas sociológicas hace énfasis en el efecto holístico, “de arriba abajo”, al contemplar preferentemente el impacto sobre las actitudes individuales del contexto macrosocial. El primero de ellos es el proceso de integración cultural nacional, ampliamente reconocido como fuente de inspiración para los valores que orientan el comportamiento de los individuos (Haller, 2002).

La investigación empírica de Blekesaune y Quadagno (2003), a partir de la base de datos de 23 países (y 24 contextos nacionales) participantes en los International Social Survey Programs (ISSP) sobre el *Papel del Gobierno* llevados a cabo entre 1995 y 1998 (10), establece que las políticas gubernamentales de ayuda a los desempleados reciben un apoyo medio de 4,9 (medido sobre una escala de 1 a 7) y que las diferencias de actitud individual hacia estas políticas se explican en un 21% por las diferencias entre contextos nacionales (quedando un 79% a explicar dentro de cada país, una vez controladas las diferencias de género y edad). En cambio, las políticas de ayuda a los enfermos y mayores de edad reciben un apoyo medio muy superior, de 6,1 sobre 7, mientras que el contexto nacional sólo explica el 12% de las diferencias individuales. El individuo de referencia es el varón de 38 años y el grado de apoyo a estas dos políticas básicas de bienestar aumenta con la edad y es mayor entre las mujeres que entre los hombres –esto último, sobre todo, en relación a las políticas de desempleo–.

Además, con carácter general la situación individual de desempleo eleva en 0,55 puntos, sobre un máximo de 7, el apoyo a las políticas de desempleo, mientras que las diferencias nacionales respecto a estas políticas se explican en un 34% por el nivel general de desempleo existente en cada país (lo que explica así mismo en un 26% las diferencias de apoyo hacia otros ámbitos del Estado de bienestar). También influyen las preferencias ideológicas: los individuos igualitarios elevan en 0,76 puntos su apoyo a la política de desempleo y en 0,37 puntos la aceptación de otras políticas de bienestar; al mismo tiempo, el diferente peso de las ideologías igualitarias explica el 81% de las diferencias nacionales de actitud hacia las políticas de desempleo (pero no las diferencias de apoyo hacia las políticas de protección a la vejez y la enfermedad). Finalmente, una tercera parte del superior apoyo de los desempleados hacia las políticas de desempleo se explica porque este grupo de población es también el más igualitario, como también lo son las mujeres y las personas de mayor edad. Todo ello indica que el mayor nivel de desempleo en un país eleva la sensibilidad individual hacia el riesgo de quedar en desempleo. En cambio, la ideología igualitaria apenas influye sobre el grado de apoyo a las políticas de enfermedad y vejez, porque todo el mundo es consciente de esos riesgos sin necesidad de haberlos experimentado individualmente.

Un segundo nivel de análisis estudia el impacto de los regímenes de bienestar sobre las preferencias hacia estas políticas. Andreß y Heien parten de cuatro “mundos del bienestar”, al añadir a los tres mundos de Esping-Andersen el espacio postcomunista, con el fin de analizar la evolución la Alemania del Este, en una etapa en que la socialización de la mayor parte de su población había tenido lugar bajo un régimen de bienestar muy próximo al tipo ideal de sistema desmercantilizado pero sus expectativas y

actitudes se movían en un sistema de bienestar conservador. El propósito principal del trabajo de estos autores consiste en contrastar la existencia de un fuerte “efecto régimen de bienestar”, una vez controlado el efecto de composición derivado de las diferencias en las características individuales. Su ejercicio se ve limitado, naturalmente, por la fuente de datos, la fecha de recogida y la metodología estática empleadas –la segunda oleada del *International Social Survey Programme* (ISSP), correspondiente a 1992, y el modelo multigrupo de ecuaciones estructurales (SEM)– (11).

En este estudio, los “cuatro mundos” del bienestar quedan especificados a través de la gradación en las actitudes de la población respecto a la amplitud y la intensidad de la acción de gobierno a la hora de redistribuir la renta y de proporcionar empleo e ingresos básicos a la población: el contraste empírico permite confirmar la hipótesis de que la mayor intensidad corresponde al mundo poscomunista, seguido del socialdemócrata, y la menor intensidad corresponde al régimen liberal, con el régimen conservador ocupando una posición intermedia.

Tales diferencias no pueden ser explicadas ni se ven considerablemente afectadas por el efecto de composición derivado de las características individuales de los diferentes grupos de población, ya que una vez controladas estas variables, las diferencias se mantienen tanto en el orden jerárquico como en la amplitud de la separación actitudinal entre países. El modelo empleado permite separar también la influencia de los procesos de interacción entre los niveles macro y microsocial, que mantienen igualmente aquella jerarquía, aunque atenúan las diferencias entre países. En consecuencia, las conclusiones de los autores hacen prevalecer la influencia de la integración propia de cada cultura nacional, modulada por la influencia de los intereses y de las experiencias de socialización individuales, pero no de forma separada por países, sino contextualizada dentro de cada régimen específico de bienestar.

En cambio, el efecto de composición tiene escasa influencia, lo que implica que las diferencias entre regímenes de bienestar no podrían explicarse por el procedimiento de agregación, utilizando una metodología atomística estrictamente individualista. Esto viene a confirmar empíricamente la tesis sobre los mundos de bienestar de Esping-Andersen. *Grosso modo*, las características culturales más sobresalientes consisten en la estigmatización de los beneficiarios del *welfare* –en los países con cultura predominantemente liberal–; en la preferencia generalizada por el mantenimiento del status familiar –en los de cultura conservadora–, y en la desmercantilización del bienestar individual, en los de cultura socialdemócrata. Se trata en cualquier caso de una contrastación de carácter estático y fechada en 1992, aunque el estudio de Arts y Gelissen (2001) –que emplea datos del ISSP de 1996 y del *European Values Study* de 1999– confirma en términos generales estas conclusiones.

Empleando también los datos del ISSP de 1992, el trabajo pionero de Svalfors (1997), tipificaba las actitudes agregadas de los “cuatro mundos” –incluyendo en este caso el “mundo del bienestar radical” de los antípodas (Australia y Nueva Zelanda), y no contemplando de forma separada el régimen postcomunista– con arreglo a los cuatro polos de una tabla de doble entrada:

Grado de apoyo al Estado de bienestar

		Fuerte	Débil
Actitud ante el igualitarismo	Fuerte	Socialdemócrata	Radical
	Débil	Conservador	Liberal

Y dentro de cada “mundo” la modulación de las actitudes aparecía determinada por la articulación política de los grupos de interés organizados. Pero lo que resultaba más sobresaliente para este autor era la similitud en las actitudes de los diferentes grupos (de género, clase, y estatus profesional, principalmente) al realizar la comparación transversal entre regímenes, hasta el punto de poner en cuestión la tesis según la cual los regímenes de bienestar producen verdaderas estructuras de segmentación entre la población.

Por el contrario, en el estudio de Linos y West (2003) –que emplea también los datos del ISSP, pero hace un uso intensivo de las variables demográficas en la especificación del modelo– la segmentación es precisamente la característica y el efecto principal de la existencia de los cuatro mundos: el régimen conservador se caracteriza por la hendidura entre *insiders* y *outsiders*; la discriminación de clase es característica del régimen liberal, mientras que en los regímenes universalistas el status familiar apenas influye sobre las actitudes hacia el bienestar. El régimen “radical” comparte con el régimen liberal una fuerte influencia de las creencias darwinistas sobre las actitudes hacia las políticas redistributivas, y con el régimen conservador la hendidura *insiders/outsiders*, basada en este caso en un mercado de trabajo con fuerte premio a la especialización.

En general, todo ello concuerda con el avance de las creencias acerca de la equidad relacionadas con el mérito –en detrimento de la adscripción– en las sociedades modernas avanzadas, lo que implica aceptar convivir con un cierto grado de desigualdad. Este proceso de modernización de valores en las preferencias de la población se articula con el perfil del régimen de bienestar en que viven –cuyo marco institucional enfatiza alternativamente los valores de justicia, equidad y solidaridad– pero actúa modulando el grado de preferencia hacia la actuación del gobierno en favor de la nivelación de los ingresos (Arts y Gelissen, 2001).

Ahora bien, al analizar las pautas de determinación de las actitudes sobre el bienestar dentro de cada régimen específico Andreß y Heien (2001, pp. 350-1) llegan a algunos resultados relativamente sorprendentes. El procedimiento consiste en desagregar la influencia sobre las actitudes de las características relacionadas con los intereses, los procesos de socialización y los valores individuales respecto a la igualdad. Los primeros se consideran relacionados con las variables renta familiar, posición en el mercado de trabajo y situación económica, actual y esperada; los segundos, con las variables género, grupo de edad y nivel educativo; finalmente los valores se establecen a través de la autoidentificación en relación con una pregunta dicotómica de apoyo o rechazo del igualitarismo. Cabe señalar que, mientras los dos primeros determinantes se especifican a través de variables objetivas, esta última es una variable subjetiva –así como las de preferencia general por la intervención gubernamental–.

El primer resultado que sobresale es la muy superior capacidad explicativa general del modelo en Noruega que en los otros tres países. A ello se añade en ese país el fuerte rechazo al intervencionismo gubernamental de los que se identifican con los valores anti-igualitarios; todo ello tiene seguramente que ver con el excepcionalismo de su condición de productor de petróleo, que le ha protegido de los principales choques experimentados por las economías occidentales durante el último cuarto de siglo veinte –algo que se

observa también al comparar la evolución reciente en el funcionamiento de su mercado de trabajo con la de Suecia (Flanagan, 1999, p. 1164; Traxler, 2003a)–.

En todo caso, aunque con niveles de significación inferiores a los de Noruega, el estudio de Andreß y Heien concuerda con el de Arts y Gelissen (2001) en detectar una cierta similitud actitudinal de las pautas correspondientes a los diferentes grupos de población entre países, con independencia del régimen de bienestar, lo que estos últimos autores atribuyen a la convergencia entre regímenes producida desde que Esping-Andersen formulara su tipología, a partir de datos registrados en los años setenta y primeros ochenta. Una convergencia, impulsada por la globalización, que ha afectado tanto a los parámetros y las estructuras de muchos regímenes de bienestar como –sobre todo– a las opiniones, valores y actitudes de la población respecto a la elevada prioridad concedida mayoritariamente a la solidaridad y la justicia. En cierto sentido estos trabajos desarrollan y matizan las primeras conclusiones a las que llegó Svallfors en 1997, según las cuales, sobre un fondo general de actitudes abiertamente influenciadas por cada régimen de bienestar, el papel dominante del mercado y las relaciones de producción, las diferencias de género y la división de trabajo –comunes al mundo occidental desarrollado– están haciendo aparecer pautas comunes en las actitudes hacia la redistribución e impulsando la convergencia en los mecanismos de segmentación social.

El segundo resultado consiste en la preferencia por la intervención del Gobierno entre los jóvenes nacidos entre 1962 y 1974, que resulta significativamente superior a la de los nacidos antes de 1962 en los tres países occidentales, lo que se encuentra en línea con la transición hacia los valores postmaterialistas detectada por Inglehart (1990), ya que es este grupo de edad el que se autoidentifica también mayoritariamente con los valores igualitarios, que todos los grupos demográficos consideran inherente a la mayor intervención gubernamental. Esto, obviamente, implica una mayor identificación de los jóvenes con *Powell* que con *Salina*.

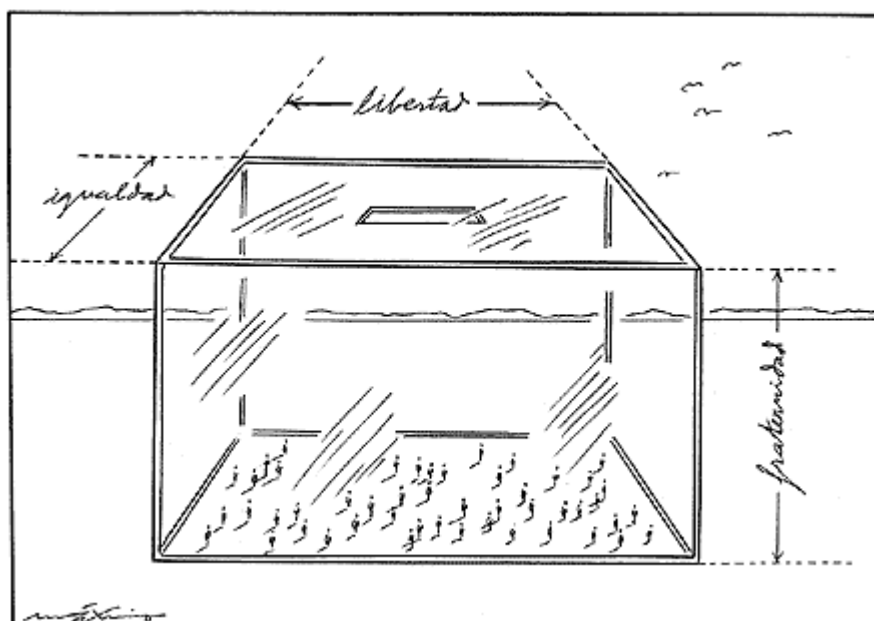
En tercer lugar, los pensionistas, los miembros de la familia dedicados a las tareas domésticas y los estudiantes muestran menos apoyo a la intervención del gobierno que la población empleada. La evidencia resulta sorprendente para los autores del estudio, pero es perfectamente consistente con la transición hacia el “estado social dos” descrita más arriba. Igualmente lo es la disminución del apoyo a la intervención del gobierno y al sistema de bienestar a medida que aumenta el nivel educativo y la situación económica actual y futura –con la excepción también, en este último caso, de Noruega–. Contrariamente a las previsiones del modelo de *diferenciación* de Bourdieu, todos ellos se identifican con *Marlowe*. Esta es también otra de las principales conclusiones del trabajo de Arts y Gelissen (2001), que atribuyen una importancia determinante a los hábitos cognitivos de la población. Y, de acuerdo con todas las expectativas, los más proclives a la actuación gubernamental en el trabajo de Andreß y Heien son los desempleados, pero especialmente en Alemania Occidental –lo que resulta consecuente con una actitud a lo *Salina*, que reclama a toda costa la conservación del status previamente alcanzado–. Finalmente, sobresale también la amplitud del apoyo a los valores igualitarios que aparece globalmente en Estados Unidos y en Alemania Occidental –originado probablemente entre los segmentos estigmatizados del sistema de *welfare* minimalista norteamericano y entre los *outsiders* del sistema corporativista alemán– cuya intensidad duplica el valor que alcanza este parámetro en Noruega y en la Alemania del Este.

4. La dinámica del Estado de Bienestar y su reforma

En suma, si nuestros supuestos son verosímiles en términos dinámicos –algo que sólo podría contrastarse mediante el análisis longitudinal sobre datos de panel, que todavía no se encuentran disponibles– puede afirmarse que el sistema de bienestar, que se había

mantenido hasta hace poco relativamente estable en las preferencias mayoritarias de las poblaciones de cada país en la Europa continental, está llegando a una situación como la descrita por Arrow en su teorema de la imposibilidad, lo que significa inestabilidad e incertidumbre. Cada país experimenta esta transición en fechas y bajo dinámicas diferentes, relacionadas con los cambios demográficos y estructurales, junto a su correlato de transformaciones en la escala de valores y los procesos de socialización, cuyo impacto complejo se deja sentir –a todos los niveles de análisis: supranacional, nacional y subnacional– tanto a escala estrictamente individual como a escala generacional, aunque no necesariamente bajo la pauta simplista de tránsito entre valores materialistas y postmaterialistas puesta en circulación por Inglehart –que Andreß y Heien parecen aceptar– sino a lo largo de los diferentes niveles en la jerarquía de valores –universales, sociales o específicos para cada situación o característica individual– cuyo análisis requiere explicitar un modelo teórico complejo (Haller, 2002), que dista mucho todavía del modelo pragmático de relaciones estructurales presentado por estos autores (12).

En cualquier caso, la inestabilidad propia del “estado social dos” resulta contradictoria con un ámbito de la elección social que persigue precisamente cubrir riesgos y maximizar la seguridad. Naturalmente, en los procesos políticos de decisión democrática las cuestiones referidas al Estado de bienestar no son las únicas que figuran en los programas -por mucho que sea ésta una cuestión considerada básica por los votantes-, de modo que las mayorías electorales no pueden interpretarse directamente como opciones inequívocas sobre cada uno de los múltiples temas de la agenda (Dahl, 1956), aunque teóricamente puedan emplearse para representar preferencias (Knoblauch, 2001). Lo que sucede es que el “actor racional” o sujeto agente de las votaciones no es el individuo utilitarista unidimensional del que parte generalmente la escuela de “elección racional”, sino que admite, al menos cinco variantes o criterios de interpretación: (a) según la explicación que se ofrezca de su comportamiento electoral (expresiva o instrumental); (b) según los supuestos acerca de sus motivaciones (puramente egoísta, o con ingredientes de altruismo); (c) según se trate de procesos políticos directos o indirectos; (d) según la agenda tenga un contenido unidimensional o multidimensional; y (e), según el ámbito del funcionamiento del Estado de bienestar que se trate de explicar (Brennan, 2001). Finalmente, en este ámbito los valores se articulan de acuerdo con el diseño tridimensional proveniente de la Ilustración (Espina, 1995), que inspira, como vimos, las preferencias reveladas por nuestros tres *homines*, cuyos valores son también distintivos de los correspondientes mundos de bienestar. La inspiración de Máximo ha interpretado estos valores como las tres dimensiones del hecho electoral:



Máximo, *El País*, 02/III/2004.

Adviértase que los tres sociotipos adultos que pueblan nuestros estados de bienestar traen a la memoria también las tres especies que habitan la sociedad adolescente de los institutos de enseñanza media norteamericanos: los “deportistas” (*Jocks*), los “gilipollas” (*Nerds*), y los “quemados” (*burnouts*), taxonomía a través de la cual James Coleman (1961) cohonestó el individualismo metodológico con el holismo societario, dando pie a una sociología de la educación que ancla todos los procesos de interacción social en el ámbito escolar sobre decisiones estrictamente individuales, pero en la que el sujeto agente no es el tipo de individuo amorfo del que parte la economía neoclásica, mero ente maximizador de su utilidad pecuniaria, presente o futura, sino un individuo cuya identidad se define en función de los roles sociales en los que cifra su ideal: la identidad afirmativa y extremadamente cuidadosa de su apariencia de los “deportistas”, autocalificados como “clase dirigente” (13); la identidad esforzada y meritocrática de los *nerds* –buenos alumnos por antonomasia–, o la ausencia de ideal de los “quemados”. La vigencia empírica de tal tipología hasta nuestros días ha permitido a George Akerlof y Rachel Kranton (2002) desarrollar una economía de la educación en la que no existe una única función de utilidad para todos los estudiantes, sino una específica para cada grupo, acorde con su autopercepción identitaria, ya que la principal “remuneración” que obtiene el adolescente en la escuela es precisamente el mayor o menor reconocimiento de su capacidad para acercarse a su propio ideal identitario –incentivo típicamente Weberiano–. Un ideal que se encuentra condicionado por el entorno sociológico del estudiante, pero que él mismo puede establecer en función de sus propias preferencias y capacidades y del esfuerzo que está dispuesto a realizar. A su vez, la escuela puede tratar de imponer su propio ideal, acomodarse a las identidades de sus alumnos o “invertir en identidades”. Los resultados educativos no dependen sólo de los recursos invertidos en la escuela, sino de la interacción entre las identidades y el comportamiento de los estudiantes y la política escolar, condicionada a su vez por las motivaciones de educadores y administradores.

Nuestros tres sociotipos adultos se ven igualmente condicionados por el entorno de bienestar en el que viven, pero en sus preferencias tienen también cabida sus propias opciones de valores, la percepción de los cambios y de los riesgos que se ciernen sobre ellos, y las alternativas que se les ofrecen desde las instituciones de bienestar. Ciertamente, mientras los problemas de sostenibilidad no aparecieron en la agenda política inmediata, ésta se había limitado a incluir el corto número de temas que requieren

decisiones anuales de continuidad (como la revalorización de prestaciones por la inflación, las cotizaciones y, eventualmente, la fijación de umbrales máximos y mínimos para unas y otras), sin entrar apenas en discusión sobre reformas paramétricas que equilibren las cuentas a corto plazo, y mucho menos sobre las reformas estructurales para afrontar y corregir los desequilibrios a largo plazo. En tales circunstancias, la función de utilidad por la que orientaban su elección política resultaba extremadamente sencilla.

Además, hasta mediados de los años noventa el tratamiento específico de los temas de bienestar había sido “delegado” en España –y en otros países en los que se practica el diálogo social– hacia los procesos indirectos de decisión social adoptados en mesas de diálogo y concertación neocorporatista. En este ámbito, cada uno de nuestros tres grupos se encuentra representado de forma muy imperfecta. Puede considerarse que los sindicatos representan directamente al grupo de los *insiders* (los *Salina*) y en medida muy inferior a los *outsiders* (los *Powell*), de modo que sus preferencias han venido coincidiendo con las del grupo B, como puso de manifiesto el estudio de Herce y Pérez Díaz (1995, pp. 70-76), en lo relativo a la reforma del sistema de pensiones. Por su parte, la segmentación del mercado de trabajo no se ha traducido aún en un cambio sustancial de las actitudes de los trabajadores precarios del grupo C hacia la acción colectiva – antes al contrario–, aunque de no mediar una respuesta organizativa adecuada el nuevo contexto acabará por frustrar sus expectativas, al privarles de voz (Fernández Macías, 2003).

Objetivamente, en términos financieros y de regulación, las organizaciones empresariales suelen presentarse ideológicamente como gente *Marlowe*, pero el sistema de bienestar corporativista administra “en su nombre” los salarios diferidos y una cierta regulación mantienen la efervescencia del conflicto sindical a cierta distancia de las empresas, facilitando la gobernabilidad –aparte de otras formas de intervención gubernamental, que contribuyen a socializar el riesgo–, de modo que sus preferencias han venido coincidiendo con las del grupo B, pero con la liberalización comercial pueden rolar hacia modos de flexibilidad y de intervención de tipo C, ya que, contrariamente a lo que se piensa, los países más abiertos a la competencia internacional muestran una clara tendencia a ampliar la acción del gobierno (Rodrik, 1998). En España, en materia de reforma del sistema de pensiones, en el citado estudio de Herce y Pérez Díaz la CEOE se manifestaba a favor del tipo de reformas adoptadas posteriormente en Alemania y Suecia, y sólo las organizaciones sectoriales directamente interesadas en la gestión de la privatización adoptaban actitudes a lo *Marlowe* (1995, pp. 77-80). Los empresarios de Irlanda e Italia parecen haber adoptado una actitud igualmente ecléctica (Bacaro, 2003).

Finalmente, en términos constitucionales el gobierno representa a todos, pero debe velar especialmente por el grupo C, no representado formalmente en la mesa de negociaciones. En la práctica, esto sólo resulta factible bajo las condiciones del “estado social uno”, ya que en tal caso, para apoyarse sobre una coalición mayoritaria –y colocarse en la posición del votante mediano– bastaba con que en el diálogo tripartito el Gobierno se inclinase ligeramente hacia las preferencias del grupo B (los sindicatos) – como sucedió en España hasta 1986–. Esta es una situación que favorecía obviamente a los partidos “pro labor”, como ha puesto de manifiesto la literatura neocorporatista, pero que ha soportado bien en España la alternancia de gobierno.

En cambio, bajo las condiciones del “estado social dos” la indeterminación impide conocer la posición precisa del votante mediano, que es la que orienta la del Gobierno en el diálogo tripartito, de modo que éste llega a hacerse imposible: si un Gobierno de izquierda continúa favoreciendo desmesuradamente al grupo B, en detrimento del C, corre el riesgo de que se forme una coalición de C con A, que le derribe y traiga un gobierno “*Marlowe*”. Pero si pretende avanzar él sólo en dirección a C, corre el riesgo de que se rompa el diálogo social y se abra paso una coalición de A y B (activa, o por

abstención de éstos últimos e incorporación parcial del grupo C) que le haga perder las elecciones, como sucedió en España en 1996. El modelo de Hassler *et alia* (2001) da cuenta teóricamente de esta posibilidad bajo el supuesto de votantes racionales que anticipan los resultados de su elección a lo largo de votaciones sucesivas, que pueden conducir tanto a un equilibrio *pro-welfare* como a otro *anti-welfare*.

Con una población de tres votantes, victoria por mayoría, un solo tema de votación en la agenda y una renta máxima de 300 unidades, en el modelo del votante mediano que sólo persigue maximizar su interés el partido (¿socialdemócrata?) que ofrece máxima distribución [100, 100, 100] pierde frente al partido (¿conservador?) que maximiza la utilidad de sólo dos votantes [150, 150, 0], programa que cae derrotado ante la del partido (¿liberal?) que ofrece una distribución [160, 0, 10], que sale derrotada, a su vez, frente a otra (¿populista-revolucionaria?) que mejora, aunque poco, la posición de los dos últimos votantes [0, 10, 20]. Estos ejemplos numéricos sencillos, propuestos por Brennan (2001, p. 224) –a los que aquí se le ha añadido sólo la interrogante y los calificativos–, ilustran aquella inestabilidad.

Si, además, el tránsito entre los estados sociales uno y dos resulta incompleto, el problema se complica toda solución es inestable y la solución se dilata en el tiempo (como ocurrió en España entre 1988 y 1996) y resulta reversible. En el propio ámbito de la defensa de los intereses de los trabajadores dentro de las grandes empresas, las elecciones sindicales españolas celebradas en medio de la crisis empresarial de 1994 permitieron ya aflorar una fuerte contestación a los dos grandes sindicatos, que se reflejó en la primera posición conseguida por las listas independientes (Espina, 1999). Así pues, el sistema de bienestar tenía que volver en España a la agenda de la elección social, pero bajo las condiciones del “estado social dos” los resultados habrían sido imprevisibles y escasamente estables, lo que habría aumentado la incertidumbre sobre su futuro, incapacitando al sistema de bienestar resultante para realizar una cobertura adecuada de riesgos a medio y largo plazo. Eso es lo que explica el Pacto de Toledo sobre las pensiones, por el que se decidió excluirlas de nuevo de la agenda política y sustituir la decisión social democrática con mayoría relativa por un compromiso permanente de consenso básico y procedimiento de decisión consociativa. Una vez despejado este problema, el diálogo social tripartito pudo recomponerse a finales de los años noventa, reintroduciendo en su agenda el problema de la segmentación contractual, aunque utilizando un mecanismo de intensidad limitada –el del contrato indefinido con indemnización de salida más baja que la ordinaria–, que discrimina a los *outsiders*, una vez admitidos en el mercado.

Con carácter general, puede afirmarse que el único grupo que se encuentra en condiciones de decidir por sí mismo y romper la indeterminación actual acerca del futuro del Estado de Bienestar en la Europa continental –y especialmente en la del sur– es el grupo B (*Salina*), pero esta capacidad de decisión tiene un alcance de duración limitada en el tiempo y perfectamente acotado en lo que se refiere a las alternativas disponibles. La reforma del régimen de bienestar europeo tradicional [Y] puede dirigirse hacia el régimen nórdico [Z] –que está siendo, a su vez, objeto de profundas reformas–, hacia el anglosajón [X], o adoptar una forma híbrida; lo que no puede es sobrevivir en su estado actual. Además, en la medida en que se pospongan las principales decisiones, el tiempo jugará en favor de la opción minimalista anglosajona [X]. Todo ello es fácil de demostrar.

En primer lugar, para aumentar el peso decisorio del grupo B -y de sus preferencias, en el cuerpo social- debería aumentar el tamaño del propio grupo, creciendo a costa de C. Pero esto no sucederá si no se avanza en el camino hacia la flexibilidad, lo que significa elevar, dentro del propio grupo B, la preferencia por el régimen de bienestar del tipo [Z] en materia de regulación laboral, flexibilizándola. El análisis comparativo de preferencias realizado por Boeri *et alia* (2001a) en Francia, Alemania, Italia y España indica que este

tipo de reformas resultaría políticamente factible porque los trabajadores de los dos últimos países se muestran dispuestos a financiar con aumento de cotizaciones una mayor cobertura de desempleo, lo que cubriría el riesgo derivado de disminuir la regulación protectora del empleo, al reducir el tiempo de cotización necesario para conseguir protección y aumentar la duración de ésta (p. 21). La reforma de la protección del desempleo diseñada por Blanchard y Tirole (2003) para Francia –y formalizada como las “instituciones óptimas de regulación laboral” (2004)– constituye al mismo tiempo una forma general de ampliación de la protección del desempleo y un mecanismo no discriminatorio para estimular la estabilidad en el empleo, al hacer recaer una parte creciente de las cotizaciones para el seguro de desempleo sobre las empresas con estructuras contractuales más inestables, elevando al mismo tiempo el coste marginal de los despidos mediante aumentos temporales de las cotizaciones por desempleo de las empresas que los realizan, en sustitución de las indemnizaciones abonadas actualmente por el carácter “improcedente” del despido. La tipificación judicial de tales despidos dejaría así de ser discrecional, reservándose para los casos en que la empresa infrinja el procedimiento de despido.

Al mismo tiempo, sin aumentar considerablemente el apoyo económico y de servicios a las familias, la tasa de actividad femenina sólo podrá seguir creciendo a costa de la fecundidad –que depende básicamente de los jóvenes y de las mujeres del grupo C –incluidos los inmigrantes, aunque no voten (Fernández Cordon, 2000)–. Y sin una recuperación rápida de la fecundidad la sostenibilidad de los parámetros actuales del sistema de pensiones se verá amenazada a largo plazo, lo que, de no ponerse remedio a corto plazo, acelerará, a su vez, las preferencias por el régimen minimalista de pensiones de tipo [X] dentro del grupo C –ante la incertidumbre sobre si podrán llegar a beneficiarse en su día del sistema de reparto–. Evitarlo requiere introducir en el sistema de pensiones garantías propias del sistema de capitalización –siquiera sea nocional, al modo sueco–.

Pero hacer aparecer un régimen efectivo de protección a la familia implica reasignar recursos desde el actual sistema de protección, rediseñando el modelo de bienestar [Y] para hacerlo converger también hacia [Z] en materia de protección social, estableciendo al mismo tiempo una red básica de asistencia social universal, hasta ahora “delegada” en la familia y otras instituciones voluntarias, pero sin cuya existencia no se concibe una sociedad moderna decente, capaz de evitar la anomia, la invasión de los espacios públicos por las exhibiciones de miseria, y el aumento de la delincuencia y del gasto presupuestario en seguridad y administración penal.

La reforma debe hacer posible, además, el imprescindible reforzamiento de la política dirigida hacia el colectivo de los inmigrantes. Éste se elevaba ya, en enero de 2003, al 6,24% de la población empadronada (INE, 2004), siendo la mitad de ellos ilegales, grupo cuyo nivel de protección social resulta completamente inaceptable (Rodríguez Cabrero, 2003). Especial prioridad habrá que otorgar a la educación y la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo (Cachón, 2003), y a la integración escolar de la “segunda generación”, lo que implica garantizar al mismo tiempo la igualdad y la atención de sus necesidades específicas (Carabaña, 2004), para abrir espacio a la “España inmigrante”, cuya consolidación en el largo plazo supone ensanchar horizontalmente el grado de pluralismo cultural, en una sociedad sometida el mismo tiempo al reto de acomodar verticalmente una rica pluralidad de culturas territoriales, habiendo recuperado ella misma sus derechos de ciudadanía tan sólo hace veinticinco años. La experiencia de los últimos siglos enseña que el ensanchamiento del derecho de ciudadanía para incluir a nuevos colectivos requiere un esfuerzo político que crece exponencialmente con relación al nivel de inclusión previamente alcanzado, porque “la ciudadanía excluye, tanto como incluye” (Wallerstein, 2004).



Romeu, *El País*, 14/XI/2003.

Desde el giro estratégico adoptado por los dos grandes sindicatos españoles a mediados de los noventa, este tipo de reflexiones parece haberse abierto camino. Como “prescriptores” y orientadores principales de las preferencias colectivas del grupo B –una instancia de coordinación de la que carecen los otros grupos– estas organizaciones disponen de los instrumentos, la confianza y la capacidad de elaboración necesaria para suscitar una reflexión colectiva sobre los intereses del grupo a largo plazo, el primero de los cuales consiste en propiciar la reconciliación de intereses estratégicos entre los dos grandes segmentos del mercado de trabajo, integrados por los grupos B y C, como han venido haciendo los sindicatos nórdicos. La sostenibilidad del sistema depende mucho más de la eficiencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y de un aumento de las tasas de participación y de movilidad –para desterrar la segmentación existente, rompiendo las trampas en que se ven atrapados determinados colectivos de población (Hernanz, 2003)– que de cualquier forma de determinismo derivado de la estructura demográfica. La reforma requiere, eso sí, construir un nuevo consenso acerca de lo que significa una sociedad solidaria en el siglo XXI (Sarfati, 2003).

Pero un nuevo consenso requiere información y esa es la principal carencia, por ejemplo, con relación a la denominada crisis futura de las pensiones: en España, el 51% de la población activa no sabe cuánto cotiza para su pensión, y el 68% de los que creen saberlo piensa que cotiza menos de lo que efectivamente paga (incluyendo la cotización empresarial). Las cifras alemanas son 21% y 45%, las italianas 35% y 24%, y las francesas 35% y 52%, respectivamente. Todo ello refleja fielmente el grado de atención que prestan al problema los medios de información económica. Consecuentemente, sólo el 43% de los españoles que contestan esperan que antes del año 2015 se produzca una crisis en el sistema –frente al 72% de los italianos y al 81/82% de los Alemanes y franceses– y sólo el 47% piensa en España que habrá que reducir sustancialmente el nivel de protección antes de 2010 –frente al 73/75% de los otros tres países (Boeri *et alia*, 2001a, p. 23-54)–.

La exploración sobre las opciones alternativas al sistema de pensiones en estos cuatro países con régimen de bienestar de tipo continental [Y] es claramente ilustrativa de la transición entre los estados sociales “uno” y “dos” a los que nos venimos refiriendo. En

caso de que se les diera la oportunidad de abandonar libremente el sistema (sin pérdida de los derechos ya adquiridos), dos tercios de las respuestas serían negativas (que en nuestro esquema analítico deberían corresponder a los grupos B y C), pero más de la mitad de ellas cambiarían de opinión si se implantara un sistema alternativo de ahorro obligatorio para la jubilación (que corresponderían mayoritariamente al grupo C), mientras que el otro 30% (correspondiente al núcleo duro de los *Salina*) permanecería irreductiblemente en el sistema. En realidad, sólo el 10% rechaza tanto el sistema actual de pensiones como cualquier otra alternativa. Éstos serían los *Marlowe* “pata negra” del grupo A, mientras que el 23% restante de este grupo aceptaría que se implantase alguna forma de ahorro obligatorio de vejez. Finalmente, casi el 60% aceptaría salir del sistema de reparto (PAYGO) y pasar a un sistema obligatorio de ahorro para la vejez en régimen de capitalización, con tal de que se preservasen los derechos adquiridos (Boeri *et alia*, 2001a, cuadro 9).

Esto es, el tipo de reforma adoptado recientemente en Suecia –que mantiene íntegro el sistema, aunque reduce su intensidad redistributiva, aproximándose al régimen [X], de mercado– es ya la opción preferida por una mayoría amplia de los europeos que viven bajo el régimen continental de pensiones. Como era de suponer, la tasa de aceptación de la reforma decrece con la edad y aumenta con los ingresos y el nivel educativo. En Alemania e Italia es mayor que en Francia y España, y todo ello apenas se ve afectado por las opiniones políticas o el grado de afiliación sindical, pero sí por la situación de desempleo, lo que sugiere que ampliar la protección del desempleo podría facilitar también la reforma de pensiones. En conjunto, más de la mitad de la población desea mantener el Estado de Bienestar, salvo en Italia –en donde el 43% desea reducirlo, probablemente porque éste es también el país que está más persuadido de la inminencia de la crisis porque conoce mejor la situación del sistema, desproporcionadamente generoso, incluso si se lo compara con el régimen continental, ya de por sí generoso con los *insiders*–. Además, esta investigación ratifica la preferencia de los jóvenes, los autónomos y los que no trabajan por reducir el tamaño del Estado de bienestar. En cambio, las personas afiliadas a los sindicatos prefieren fortalecerlo, al igual que lo desea el 31% de los españoles, aunque para ello tuviera que pagar más impuestos –lo que concuerda con el hecho de que la presión contributiva española es todavía inferior a la de los otros tres países–.

Pero el Estado de Bienestar europeo sólo puede fortalecerse o mantenerse de forma sostenible realizando la transición desde el régimen de bienestar [Y] a un régimen [Z] suavizado. En última instancia, para los sindicatos encabezar esa transición no significaría otra cosa que asumir plenamente el papel de defensores de los intereses generales de todos los asalariados al que se refiere la Constitución Española, actuando al modo de coordinador central en su defensa (Danthine-Hunt, 1994), y renunciando definitivamente a su papel de extractores de rentas de monopolio (Blanchard, 2000), incompatible con el nuevo contexto macroeconómico (Boeri *et alia*, 2001b). La experiencia del último cuarto de siglo permite vaticinar que un proceso de reforma desarrollado de manera concertada permitiría actuar con gradualismo y adoptar las decisiones con anticipación suficiente para evitar sorpresas y alternativas radicales de última hora. En caso contrario, lo probable será que los gobiernos –cualquiera que sea su orientación política– tiendan a posponer las decisiones –para evitar distanciarse del votante mediano– hasta que no quede otra alternativa, pero entonces la reforma será presumiblemente reactiva y más radical, orientándose hacia el régimen minimalista [X], tras agotarse el tiempo y la oportunidad de corregir tendencias y adoptar pautas de comportamiento preventivo. Esto es precisamente lo que menos conviene a los sindicatos, porque en el régimen minimalista de bienestar su papel es extremadamente modesto, y empeora con la legislación antisindical que encuentra amplio apoyo entre los electores cuando los sindicatos obstruyen la reforma institucional, como demuestran las experiencias británica, neozelandesa y australiana, con el resultado de un aumento

desproporcionado de la inseguridad en el trabajo (Ruyter & Burgess, 2003). Las manifestaciones de los sindicatos españoles ante el Pacto de Toledo reflejan bien su posición dentro de este laberinto de senda incierta y equilibrio inestable (14).

El desarrollo histórico de los tres modelos a los que se ha acogido la escuela norteamericana a lo largo del siglo XX ilustra perfectamente la respuesta institucional a este tipo de encrucijadas:

“El primer modelo responde a la descripción que hacen los historiadores del período inicial del siglo XX: las escuelas tenían un ideal único, que los estudiantes podían aceptar o rechazar. El segundo modelo responde a la descripción sociológica de la educación pública contemporánea: la escuela se adapta a los diferentes colectivos de estudiantes –en parte como consecuencia de la integración forzosa impuesta por el sistema judicial–, permitiéndoles elegir entre diferentes ideales dentro de la misma escuela. El tercer modelo recoge la naturaleza de los programas de reforma: la escuela reduce la diferencia social entre estudiante y escuela, de modo que los estudiantes puedan identificarse con ella, lo que mejora el rendimiento académico” (Akerlof y Kranton, pp. 1182 y ss., proporcionan la formalización matemática de estos tres modelos).

En síntesis, al igual que sucede con la escuela norteamericana, la encrucijada del Estado de bienestar en el siglo XXI no admite obsecarse en el mantenimiento de un único ideal, apegado a la tradición secular, ni esperar que nuestros tres sociotipos alcancen un resultado eficiente a través del procedimiento atomístico de elección pública “a la carta” entre regímenes. De acuerdo con el teorema de Arrow, tal resultado eficiente puede resultar imposible, del mismo modo que el modelo norteamericano de elección de identidades “a la carta” en la escuela ha conducido al bloqueo del sistema educativo y a la generalización del fracaso escolar. La escuela y el sistema de bienestar son instituciones. En la medida en que una y otro sean capaces de responder a la pluralidad de identidades y de proporcionar coberturas adecuadas a los nuevos tipos de riesgo serán capaces de cambiar la identidad de los escolares y de controlar el riesgo de los participantes en el sistema de bienestar.

En última instancia el debate bienestarista en la Europa continental vienen protagonizándolo dos sociotipos: el de “tomadores de riesgo” (*risk takers*) y el de “adversos al riesgo” (*risk avoiders*) –los *Marlowe* y los *Salina*–, como corresponde a las actitudes contrapuestas que las ciencias del comportamiento han identificado empíricamente como reacciones más frecuentes frente a situaciones de amenaza creciente (March-Shapira, 1992). Sin embargo, el *Management* moderno ha identificado un comportamiento alternativo, que parte de la idea de que el riesgo es manejable y trata de modificarlo (*risk makers*), más que de aceptarlo o rechazarlo pasivamente, con vistas a dominar el entorno para gobernar el riesgo (Adler, 1980). Esta es la única política institucional que puede ofrecer respuestas al vacío de bienestar al que se enfrenta nuestro tercer sociotipo –el de los *Powell* en el Estado de bienestar; el de los “quemados” en la escuela–, pero tal respuesta institucional no será posible si los otros dos grupos –o, al menos el que se encuentran más próximo a él– no reconfigura sus propias preferencias ante la evidencia manifiesta de que la eliminación completa del riesgo es imposible en la sociedad de la segunda modernidad y que lo más que cabe es mantener el riesgo bajo control.

El problema se plantea con especial intensidad en España, dado que la rápida edificación del Estado de bienestar hace que los seis grupos generacionales coetáneos hayan experimentado procesos de socialización en los que prevalecieron instituciones de regulación y sistemas de valores contrapuestos, lo que se materializa en actitudes hacia el mercado de trabajo, la fiscalidad y el sistema de bienestar extremadamente

diferenciados (15). Frente al cambio radical del entorno, lo importante para los sindicatos no debería ser ahora mantener incólumes las instituciones del Estado de Bienestar, sino proceder a su cambio preservando un grado razonable de control, coordinación y participación colectiva, como alternativa a la pura desregulación (Regini, 2003).



Forges, *El País*, 12/XII/2003.

Conclusión

Los trabajadores de producción sustentadores principales del tipo de familia característico de la “edad dorada de la producción fordista” han conservado su hegemonía social durante la etapa de crisis y transición, exigiendo una estrategia de respuesta que les beneficiaba, con fuertes barreras de salida, generosos subsidios de desempleo y amplias oportunidades de prejubilación.

Sus mujeres e hijos lo han tenido más difícil en el mercado de trabajo secundario, inestable y peor remunerado, aunque, en general, los arreglos en el interior de la familia han redistribuido ventajas e inconvenientes entre sus miembros, preservando globalmente un fuerte grado de apoyo político al viejo sistema de bienestar social, permitiendo prolongar su vigencia mucho más allá de lo razonable, especialmente en la Europa del sur, hasta poner en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. Ésta se ve amenazada porque la contrapartida a la mayor dependencia e inestabilidad del trabajo de los más jóvenes ha sido el hundimiento de la fecundidad, el desequilibrio a largo plazo de los sistemas de pensiones basados en el reparto, y la desconfianza creciente respecto a las perspectivas de un juego equitativo de transferencias intergeneracionales.

De no cambiar las circunstancias, todo ello permite prever un vuelco en las preferencias futuras sobre el sistema de bienestar y una creciente desafección respecto al denominado “régimen continental”, lo que explica el sesgo adoptado por las últimas reformas de los sistemas de pensiones, orientadas preferentemente hacia regímenes de capitalización (*full funded*) con cotizaciones definidas (*defined contributions*). Hacia este sistema convergen tanto Italia - tras las reformas Dini, Amato y Prodi-, como Suecia, aunque en este caso se trate de una capitalización simplemente “nocial”, de carácter cuasi/actuarial (Lindbeck, Persson, 2003). En el caso alemán, el primer paso ha sido implantar un sistemas mixto, acompañado de fuertes recortes de los beneficios definidos por el sistema de reparto. Pero se trata evidentemente de algo provisional, como piensa

el 90,7% de los alemanes de la denominada “reforma Riester”, cuyo principal efecto fue aumentar el nivel informativo y la percepción pesimista respecto a la capacidad de la reforma para estabilizar el sistema y sobre la inminencia de nuevas crisis (Boeri *et alia*, 2002).

El cambio en el clima de opinión provocó la ruptura –por primera vez desde la posguerra– del partido conservador con el “estado social de mercado” y con la modalidad del “capitalismo renano”, tal y como se habían venido entendiendo. Tal ruptura fue el paso previo para la adopción del acuerdo programático alcanzado el 15 de diciembre de 2003 entre todos los partidos del arco parlamentario alemán, con el que se abrió el camino para un nuevo consenso, sobre la base de un conjunto de reformas estructurales que afectan a las reglas esenciales de los principales subsistemas de bienestar –desde el de relaciones industriales, al de empleo o al de protección social–, como contrapartida a la aprobación de una reducción en la presión fiscal y un programa de reactivación de la economía alemana. Por su parte, el Canciller Schröder tuvo que dimitir en febrero 2004 de la presidencia del SPD, como consecuencia de la crisis de militancia provocada por su “Agenda XXI”, en la que se incluyen tales reformas.

Estos movimientos en los países emblemáticos de los sistemas de bienestar nórdico y continental responden al hecho de que el colectivo o clase social articulado en torno al trabajador industrial de producción ha dejado de constituir por sí sólo una base sólida para la formación de coaliciones políticas ganadoras, al separarse cada vez más sus preferencias de agenda y de opciones políticas de las del votante mediano. El *Príncipe de Salina*, de *El Gatopardo*, del que los trabajadores fordistas heredaron su apego al familiarismo, sabía que todo tenía que cambiar para preservar su interés principal (“para que todo siguiera igual”, o sea, la familia del Príncipe reubicada en el seno del nuevo grupo de hegemonía social). En su pretensión de que nada cambiara, la mayor parte de los sindicatos Europeos –con la excepción de los británicos (Minkins, 1991)– se separaron de los partidos con los que tradicionalmente habían caminado juntos, para ensayar en algunos casos soluciones utópicas y sin futuro. De este modo se abrió camino en el continente la plena autonomía entre sindicatos y partidos –contribuyendo a modernizar el sistema político, diferenciándolo del de relaciones industriales (Espina, 2000)– lo que favoreció la alternancia y aceleró el turno político en toda Europa.

¿Constituye esto una prueba de que la reforma del sistema de bienestar debe conducir a un aumento en el grado de “agonismo democrático” de la confrontación política europea, como propugna Chantal Mouffe (2000a)? Una forma de hacerlo sería recuperar la vieja dependencia entre partidos y sindicatos de izquierda, elevando el nivel de enfrentamiento entre opciones políticas y centrando la agenda precisamente sobre la “defensa del estado de bienestar” continental. Pero cabe pensar, más bien, que los procesos de diferenciación entre subsistemas sociales resultan irreversibles, lo que no obsta para que pueda existir un grado razonable de coordinación entre organizaciones sociales y partidos políticos que defiendan opciones más afines a los intereses representados por aquellos. Incluso en el Reino Unido se observan ya indicios y avances hacia una relación más flexible entre el *Nuevo Laborismo* y las *Trade Unions*, dentro de la “relación conflictiva” tradicional, que no se ha roto, pero que empieza a ser analizada y evaluada de manera explícita por ambas partes (Ludlam-Taylor, 2003).

Sin embargo, el tránsito hacia lo que hemos definido como “estado social dos” implica un mayor grado de pluralismo en las prácticas desplegadas dentro del sistema político, precisamente porque no existe definida *a priori* una coalición política mayoritaria centrada en torno al grupo social del obrero fordista tradicional y su familia, muy distanciado ahora de la posición del votante mediano. Al mismo tiempo, la mayor inestabilidad en las preferencias de éste con relación al modelo preferible de bienestar social amenaza contagiar su volatilidad a la decisión social adoptada en cada momento, lo que destruiría

la capacidad del sistema para cubrir de forma adecuada los riesgos que se pretenden asegurar, que son por definición de larga y muy larga duración, al estar asociados a trayectorias sociales completas y a la sucesión entre generaciones.

Por lo demás, todos estos cambios se registran en paralelo con la llamada “segunda transición demográfica”, que acompaña a la segunda modernización. Un proceso al que apenas se ha hecho referencia en estas páginas, pero cuya característica fundamental consiste precisamente en la separación creciente entre el proceso de reproducción y las estructuras familiares propias de la “primera transición”, cuya volatilidad aumenta desproporcionadamente –agravando la crisis que se cierne sobre las estructuras de bienestar familiaristas—. A ella se une el avance de la simetría entre los comportamientos de los dos sexos, el valor superior atribuido a la autonomía individual, y la multiplicidad de estilos de vida y de formas de organizar el ciclo vital. El cambio puede no ser tan visible como el que afecta a las estructuras económicas, en parte porque discurre por sendas idiosincrásicas que dependen aparentemente de las trayectorias históricas de la primera transición –lo que reintroduce formas débiles de tradición, “inventadas” por la modernidad, como quiere Giddens (1994)–, porque uno de los tres pilares que sustentan las nuevas formas de comportamiento consiste precisamente en ser autopercibidas como culturalmente legítimas. Se trata de un proceso que actúa al modo del contagio epidemiológico, que avanza de forma paulatina, persistente e irreversible, pero que resulta al mismo tiempo considerablemente abierto y sujeto a la dinámica de la innovación propia de la sociedad reflexiva, lo que eleva su nivel de incertidumbre (Lesthaeghe & Neels, 2002).

Todo ello explica que el mayor pluralismo no haya traído el agonismo, sino más bien fórmulas de democracia consociativa con relación a este punto particular de la agenda política, tanto a escala de los países individuales como a escala de la Unión Europea, a través en este caso del Método Abierto de Coordinación y Vigilancia en Política de Pensiones, adoptado voluntariamente en la cumbre de Goteburgo por los quince Estados miembros, sin estar obligados a hacerlo en virtud del Tratado; esto es, aceptando cada uno soportar una cierta presión entre iguales (*peer pressure*) para avanzar en el camino hacia la sostenibilidad. O, lo que es lo mismo, en la Europa del siglo XXI todos admiten que el diseño fundamental del sistema de bienestar de cada país debe quedar fuera de la agenda de decisiones políticas “agonistas” e incluirse en la “estructura básica” de la sociedad, única forma de satisfacer al mismo tiempo en este ámbito el afán de Rawls (1988) por cohonstar democracia y liberalismo (o libertad y equidad) y la pretensión de Habermas (1996) de asentar la legitimidad de las políticas básicas sobre procedimientos de democracia deliberativa. Una forma de democracia cuya dimensión normativa no es simplemente procedimental, sino que proviene de la “racionalidad comunicativa” proporcionada por debates en la esfera pública en que todos se ven obligados a asumir el principio de imparcialidad para definir el bien común –y a apoyar la argumentación sobre razonamientos ampliamente contrastables–, algo que resulta plenamente consistente con la “sociedad reflexiva”.

Pues bien, emprender este viaje exige abandonar la terminología política y los supuestos epistemológicos “agonistas” empleados por Esping-Andersen para tipificar los tres regímenes de bienestar. Y ello, en primer lugar, por razones de tipo práctico: ¿es acaso menos “socialdemócrata” el régimen de pensiones sueco adoptado en 2001 que el anterior, aunque el actual sea de capitalización individual (nocial) con contribuciones definidas? ¿O es más “socialdemócrata” el alemán, que mantiene básicamente el principio de prestaciones definidas, reduciendo sus parámetros? ¿Es el principio *erga omnes* el mejor criterio de equidad, o es preferible la selectividad para tratar a los desiguales de forma desigual en orden a corregir la desigualdad?

Pero también por razones de tipo teórico en un tiempo que ha renunciado a la búsqueda compulsiva de la verdad, despojando de cualquier forma de trascendentalismo a la búsqueda de justificaciones en que apoyar los comportamientos colectivos, los programas o el liderazgo político. Un tiempo en que la esperanza ha desplazado a la certeza, la contraposición filosófica entre esencia y apariencia se ve sustituida por la utilidad relativa de las diferentes descripciones de la realidad, y el viejo debate filosófico acerca de la correspondencia entre creencia y realidad –entro lo subjetivo y lo objetivo– ha quedado reducido a la teoría empírica, mucho más modesta, que persigue simplemente...

“... establecer la correlación del comportamiento lingüístico con la situación y el entorno... para hacer posible la ‘triangulación’ entre quien habla, quien escucha y el ambiente, que es para Davidson ‘la última fuente de la objetividad y de la comunicación.’”

Ya que nuestra capacidad de interpretar la realidad, los mensajes o los discursos no es otra cosa que la habilidad para realizar esa triangulación, como postula el pragmatismo (Rorty, p. 42, n. 22). Hoy –como siempre– buscamos apoyar nuestras expectativas sobre argumentos objetivos, pero la objetividad ya no se refiere a ninguna cualidad esencial de la realidad, sino a “la idoneidad del discurso para alcanzar consenso” (Ibid., p. 51). Un consenso, bien es verdad, de tipo vicario, cuyos protagonistas principales son en muchos casos los titulares del saber experto, en quienes decidimos confiar como prescriptores de nuestro comportamiento (Giddens, 1994).

Tampoco en este tiempo y en este ámbito sirve de mucho la teoría de los recursos del poder, de la que parte Esping-Andersen. Ciertamente, en democracia toda política práctica relevante ha de fundamentarse alternativamente en el consenso o en decisiones hegemónicas. Pero situar el sistema de bienestar en el ámbito de las pautas específicas de las “relaciones de poder” –concebidas “no como relaciones externas entre identidades preconstituidas, sino como elementos constitutivos de las propias identidades”– significa mantenerlo en un terreno precario y vulnerable, que es justamente lo que se trata de minimizar. En cambio, propugnar inscribir el sistema de bienestar en el núcleo básico de la sociedad no significa pretender alcanzar la utopía de la “sociedad bien ordenada” como piensa Chantal Mouffe (2000a), sino extraerlo de la agenda del “agonismo pluralista” inherente al sistema democrático liberal ya que –empleando el sistema conceptual de esta autora–, cada uno de los epígrafes incluidos en esa agenda política provoca la aparición de un “nosotros” y un “ellos”, que puede servir como refugio identitario en tiempos de desconcierto, pero que no aminora la percepción del riesgo.

Porque, una vez desdibujada la hegemonía política duradera de los bloques encabezados por una sola de las grandes opciones –por ejemplo, la socialdemócrata o la conservadora en Escandinavia y el Continente, respectivamente, durante la posguerra– el inevitable turno político haría imposible un Estado de bienestar suficientemente estable en sus orientaciones básicas como para proporcionar cobertura adecuada de los grandes riesgos sociales, algo a lo que nadie en Europa desea renunciar. Este apego a la forma de vida europea es el que finalmente parece haber prevalecido –no la racionalidad puramente procedimental, ni tan siquiera la “racionalidad comunicativa”– siguiendo así la orientación de Wittgenstein (1980), para quien “los acuerdos se establecen, no acerca de los significados, sino sobre las formas de vida”. Y, contra lo que piensa Mouffe (que ve el vaso medio vacío), el acuerdo tácito europeo sobre el sistema de bienestar –de tipo existencialista– no significa estrellarse contra el “duro suelo de una realidad ontológica” de formas de vida y preferencias incompatibles (base para el enfrentamiento agonista), sino que descansa sobre un sustrato de prácticas ampliamente compartidas en el continente (porque la tozuda realidad demuestra que el vaso del “modo de vida europeo” está medio lleno).

En última instancia, lo que ahora emerge es la respuesta al movimiento de desafección hacia el modelo de democracia pluralista, basado en la simple agregación de intereses, y la aspiración a alcanzar un consenso no meramente procedimental, sino moral, que se traduce en la aparición de un espacio de democracia deliberativa (Rawls, 1971), aunque su alcance se limite sólo a los fundamentos del sistema de bienestar. No se trata, pues, de elegir entre una visión metapolítica, de inspiración kantiana, y otra existencialista y perspectivista, a lo Wittgenstein (Mouffe, 200b), como fundamento de todo el sistema político europeo, sino de admitir que ciertas políticas sólo pueden cumplir su objetivo si reúnen al mismo tiempo ambas condiciones, ubicándolas en la estructura básica de la sociedad Rawlsiana. La agenda de la investigación sociológica está centrada precisamente en la identificación de los rasgos básicos que los europeos imputan a su propia sociedad.

Nota del autor: Agradezco a *El Roto*, *Forges*, *Máximo*, *Peridis* y *Romeu* la amable autorización para utilizar sus tiras y viñetas.

Notas:

(1) Véase el estudio de Watanabe y Ohkusa (2003), sobre la elasticidad de la demanda de servicios médicos derivados de la diabetes Mellitus, y sus implicaciones en un contexto de envejecimiento de la población.

(2) Véase la gráfica comparativa de stocks en 1995 y 2002 en <http://www.oecd.org/dataoecd/7/49/24994376.pdf>.

(3) En este punto me apoyo sobre los trabajos de J. A. Fernández Córdón, A. Olano, C. de Miguel e I. Agüero incluidos en M.E.H. (1986). El contraste de la tesis de Easterlin realizado por Olano y Agüero en aquellos años no fue positivo, porque se formuló de forma muy restrictiva y no contempló simultáneamente los cambios de la demanda observados por Lorente y Carrasco (Ibid.).

(4) En 1990 el índice se situó en 1,4 y durante el último quinquenio del siglo se mantuvo por debajo de 1,2, como sucedió en Italia, aunque con el nuevo siglo volvió a superarse ese suelo en ambos países. En 2002 el INE sitúa provisionalmente el de España en 1,256.

(5) Para las perspectivas de futuro, véase Fernández Córdón (2003).

(6) Sobre los problemas de medición de la eficacia económica comparativa entre sistemas siguen siendo útiles los análisis de Evsey E. Domar (1989), pp. 174 y ss. Como el suministro de servicios familiares se realizaba en Suecia a precios superiores a los de mercado, la medición del PIB sueco antes de los cambios de los años noventa se encontraría sesgada al alza por el impacto de lo que se podría denominar un “efecto Gerschenkron” impropio –derivado, como aquél, de la estructura de precios empleada, distinta de la de mercado, equivalente en este caso, no a los precios de otros países, sino a su coste, fijado de forma autónoma por el sistema de bienestar–. Probablemente tal sobreestimación del PIB se vería compensada por la infraestimación de la economía sumergida, con un efecto neto más o menos neutral. Otras distorsiones de precios, derivadas de la segmentación de los mercados entre sectores “cubierto”, regulado, y “descubierto”, competitivo, fueron estudiadas por Fölster y Peltzman (1997) y están corrigiéndose tras la entrada en la UE. Vienen aquí al caso los nexos observados por Domar (pp. 62 y ss.) entre nivel de riesgo y poder en los diferentes sistemas económicos, porque complementa los observados por Esping-Andersen entre riesgo, regímenes de bienestar y grado de dependencia de la población respecto del Estado.

(7) Véase: *Informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse* (aprobado el 30-III-1985), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Col. Seguridad Social, nº 15, 1996. El 3 de Octubre de 2003 el Pacto se renovó por cinco años, formulando 22 recomendaciones (ocho de ellas nuevas). Texto disponible en: <http://www.iurislex.net/article.php?sid=1338>.

- (8) A través del 1998-9 Forum del European University Institute: *Recasting the European Welfare State: Options, Constraints, Actors*. La lista de temas y documentos producidos puede verse y solicitarse a través de www.iue.it/EF/Welcome.html. Síntesis de estos trabajos, en Ferrera, Hemerijck y Rhodes (2000), y en Ferrera-Rhodes (eds.). Individualmente, Suecia, Noruega, Holanda y Austria encargaron a Richard Freeman estudios –individualmente, o en su calidad de director del Labour Studies Program de la NBER– previos a las correspondientes reformas: Véase la lista de estos estudios en: <http://www.nber.org/~freeman/rbf-cv.pdf>.
- (9) Una buena descripción puede verse en <http://slate.msn.com/id/1005253/>.
- (10) Estudio (ZA 2900) (sus características en <http://www.za.uni-koeln.de/data/en/issp/codebooks/s2900app.pdf>).
- (11) La explicación detallada de su metodología puede verse en Andreß y Heien (1999), junto al análisis empírico de la comparación entre las dos Alemanias tres años después de la caída del muro de Berlín. La fuente de datos, en <http://www.issp.org/>. Una descripción sencilla de la herramienta estadística (el programa Amos 4.0 de SPSS), en <http://www.spss.com/spssbi/amos/>.
- (12) Véase Andreß y Heien (2001), diagrama 1, página 346.
- (13) También Richard Dalloway era “un deportista, un hombre que no se interesaba más que por los perros”, como afirma Sally, la amiga de Clarissa “que se había casado fuera de su clase... con el hijo de un minero. Cada penique que tenían se lo había ganado a pulso” (2003, pp. 327-328). Su marido era un rico meritócrata: un *nerd*.
- (14) La posición de CCOO, en Gaceta Sindical, 8/X/2003; la de UGT, típicamente a los Salina, fue asumida por Izquierda Unida al anunciar su abstención en la votación del Pacto por el Congreso: “Izquierda Unida ante las Conclusiones del Pacto de Toledo”, Madrid, X/2003, en <http://www.izquierda-unida.es/iualdia/2003/octubre/08/conclusiones.pdf>.
- (15) Describí las cinco generaciones de comienzos de los noventa en “La disponibilidad de recursos humanos en España: Una proyección de población activa con horizonte en el siglo XXI” (Capítulo III de Espina, 1992).

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D. (1999), “Changes in Unemployment and Wage Inequality: An Alternative Theory and Some Evidence”, *American Economic Review*, 89, n° 5, pp. 1259-1278.
- _____, _____. (2003), “Patterns of Skill Premia”, *Review of Economic Studies*, Volume 70 (April), pp. 199-230, en: http://econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=491.
- Adler, S. (1980), “Risk-Making Management”, *Business Horizons*, Vol. 23, N° 2 (11–14).
- Akerlof, G.A., y R.E. Kranton, (2002), “Identity and Schooling: Some Lessons for the Economics of Education”, *Journal of Economic Literature*, vol. XL, n° 4, pp. 1167-1201.
- Alexander, Jeffrey C. (1992), “Shaky Foundations. The Presuppositions and Internal Contradictions of James Coleman’s Foundations of Social Theory”, *Theory and Society*, vol. 21, pp. 203-217.
- Andersen, Torben M. (2003), “European Integration and the Welfare State”, *Journal of Population Economics*, vol. 16, marzo, pp. 1-19.
- _____, _____, N. Haldrup & J. R. Sørensen (2000), “Labour Market Implications of EU Product Market Integration”, *Economic Policy. A European Forum*, 30, abril, 105-133.
- Andreß, Hans-Jürgen & Thorsten Heien (1999), “Explaining Public Attitudes Towards the German Welfare State using Structural Equation Models”, Conference on Recent Trends and Methods of Social Stratification Research, Potsdam, Alemania (30 abril, 1-2 mayo, 1999) *WME-Arbeitspapier* n° 7, Bielefeld, abril, disponible en: http://www.homes.uni-bielefeld.de/hjwww/forsch/wme/wme_ap7.pdf.
- _____, _____, _____ (2001), “Four Worlds of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway and the United States”, *European*

Sociological Review, vol. 17, n° 1, diciembre, pp. 337-356, disponible en: <http://reo.nii.ac.jp/journal/HtmlIndicate/Contents/SUP0000003000/JOU0003000066/ISS000018455/ART0000233506/ART0000233506.pdf>.

-Arrow, Kenneth (1963), *Social Choice and Individual Values*, Cowles Foundation, Monograph n° 12, 2nd edition.

-Arts, Wil., y John Gelissen (2001), "Welfare States, Solidarity and Justice Principles: Does the Type Really Matter?", *Acta Sociologica*, vol. 44, pp. 283-299.

-Bacaro, Lucio (2003), "What is Alive and what is Dead in the Theory of Corporatism", *British Journal of Industrial Relations*, vol. 41, n° 4, diciembre, pp. 683-706.

-Beck, Ulrich (1986), *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*, Paidós, Barcelona.

-Blekesaune, Morten y Jill Quadagno (2003), "Public Attitudes Toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations", *European Sociological Review*, vol. 19, n° 5, diciembre, pp. 415-27.

-Blanchard, Olivier (2000), "The Future of Unions", en Boeri *et alia* (2001b), pp. 292-296, disponible en: http://econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=830.

-_____, _____ y Thomas Philippon (2003), "The Decline of Rents and The Rise and Fall of European Unemployment", en: http://econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=798.

-_____, _____ y Augustin Landier (2002) "The Perverse Effects of Partial Labor Market Reform: Fixed Duration Contracts in France", *The Economic Journal*, 112, junio, pp. 214-244, disponible en: http://econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=819.

-_____, _____ y Jean Tirole (2003) "Contours of Employment Protection Reform" (en francés en *La Documentation Française*, Septiembre), disponible en: http://econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=831.

-_____, _____ (2004) "The Optimal Design of Labor Market Institutions. A First Pass", disponible en: http://econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=864.

-Boeri Tito, "Does Europe Need a Harmonised Social Policy?", Conference on Competition of Regions and Integration in EMU, 30th Economics Conference of the Austrian National Bank, Vienna, 13-14 junio 2002, disponible en: http://www2.oenb.at/tagung/vowi_2002/kf_lf/rede_boeri.pdf.

-_____, _____, Axel Börsch-Supan y Guido Tabellini (2001a), "Would you Like to Shrink the Welfare State? A Survey of European Citizens", *Economic Policy*, 32, abril, pp. 9-50.

-_____, _____, Agar Brugiavini y Lars Calmfors (eds.) (2001b), *The Role of Unions in the 21st Century*, Oxford University Press.

-_____, _____ y _____ (2002), "Would you Like to Reform the Pension System? The Opinions of European Citizens", enero 2002, MEA discussion paper series number 0207, disponible en: http://www.mea.uni-mannheim.de/mea_neu/pages/files/nopage_pubs/dp07.pdf.

-Brennan, Geoffrey (2001), "Five Rational Actor Accounts of the Welfare State", *Kyklos*, vol. 54, fasc. 2/3, pp. 213-234.

-Cachón, Lorenzo (2003), *Inmigrantes jóvenes en España. Sistema educativo y mercado de trabajo*, Injuve.

-Carabaña, Julio (2004), La inmigración y la escuela, *Economistas*, n° 99, enero, monográfico: *España, país de inmigración*.

-Coleman, James S. (1961), *The Adolescent Society: The Social Life of the Teenager and Its Impact on Education*, The Free Press, N.Y.

-Cunningham, Michael (1998), *The Hours*, Farrar Straus & Giroux, New York.

-Dahl, Robert Alan (1956), *A Preface to Democratic Theory*, Chicago University Press.

-Danthine, Jean-Pierre y Jennifer Hunt (1994), "Wage Bargaining Structure, Employment and Economic Integration", *The Economic Journal*, vol. 104, n° 424, mayo, pp. 528-541. (2).

- Doeringer, P.B. y M.J. Piore (1971), *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*, Lexington, Mass.: D.C. Heath, (especialmente la Introducción a la segunda edición; version española: MTSS, 1985).
- Domar, Evsey D. (1989), *Capitalism, Socialism and Serfdom*, Cambridge University Press (version española: MTSS, 1992).
- Driffill, J. y F. Van der Ploeg (1993), "Monopoly Unions and the Liberalisation of International Trade", *The Economic Journal*, vol. 103, nº 417, marzo, pp. 379-85.
- Drucker, Peter F. (1993), *Post-Capitalist Society*, Nueva York, Harper Collins.
- Easterlin, Richard A. y E.M. Crimmins (1985), *The Fertility Revolution: A Supply-demand Analysis*, Chicago, University of Chicago Press.
- Easterlin, Richard (1996), *Growth Triumphant. The Twenty-first Century in Historical Perspective*, Ann Arbor, The University of Michigan Press.
- Easterlin, Richard, y Macunovich, Diane J. (1997), "A Conversation with Richard Easterlin", *Journal of Population Economics*, vol. 10 (2), pp. 119-136.
- Ermisch, John, y Pamela Di Salvo (1997), "The Economic Determinants of Young People's Household Formation", *Economica*, vol. 64, 256 pp. 627-44, noviembre.
- Espina, Álvaro (comp.) (1991), *Concertación social, neocorporatismo y democracia*, MTSS.
- _____, _____ (1992), *Recursos humanos y política industrial*, Fundesco.
- _____, _____ (1995), "Individuo, ley, valor: fundamentos para una teoría tridimensional de la regulación social", *Hacienda Pública Española*, nº monográfico 1/1995, sobre Regulación y Estado del Bienestar, pp. 9-89.
- _____, _____ (1996), "La viabilidad económica del sistema de pensiones en España: ¿Un problema de benchmarking?", *Dilemas del Estado de Bienestar*, Fundación Argentaria.
- _____, _____ (1999), "El 'Guadiana' de la concertación neocorporatista en España: de la huelga general de 1988 a los acuerdos de 1997", en *Las relaciones de empleo en España*, Capítulo vol.3, Faustino Miguélez y Carlos Prieto (eds.), Siglo XXI de España, Madrid, pp. 375-398.
- _____, _____ (2001), "The Return of a 'Prodigal Son': From an Antagonistic to an Inclusive Model of Development in Spain", contribución al seminario "From Isolation to Integration: 15 Years of Spanish and Portuguese Membership in Europe", Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, 2-3 noviembre.
- Esping-Andersen, Gösta (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, Basil Blackwell (versión española: *Los tres mundos del Estado de bienestar*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1993).
- _____, _____ (1999), *Social Foundations of Postindustrial Economies*, Oxford University Press. Versión española: *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*, Ariel, Sociología, Barcelona, 2000, (trad.: Francisco Ramos).
- _____, _____ (2002), "Towards a Welfare State for the XXI Century", disponible en: <http://www.socialeurope.com/pdfs/Gosta-Esping.pdf>.
- Fernández Cordón, Juan Antonio (1986), "Análisis longitudinal de la fecundidad en España", en M.E.H., pp. 49-76.
- _____, _____ (2000), "Demografía, dependencia y oferta de trabajo", Cap. 7 de J.A. Herce y J.F. Jimeno (coords.), *Mercado de trabajo, inmigración y Estado del bienestar. Aspectos económicos y debate político*, FEDEA-CEA, pp. 45-72. Disponible en: <ftp://ftp.fedea.es/pub/inmigra/parte7.pdf>.
- _____, _____ (2003), "El futuro demográfico de España", *Sistema*, nº 175-176, septiembre, pp. 243-262.
- Fernández Macías, Enrique (2003), "Job Instability and Political Attitudes Towards Work: Some Lessons From the Spanish Case", *European Journal of Industrial Relations*, vol. 9, nº 2, julio, pp. 205-22.
- Ferrera, M., A. Hemerijck y M. Rhodes (2000), *Recasting European Welfare States for the 21st Century*, en: <http://wiscinfo.doit.wisc.edu/eucenter/Paperseries/rhodes.htm>.

- _____, _____ y M. Rhodes (eds.) (2000), *Recasting European Welfare States*, Frank Cass&Co.
- Flanagan, Robert J. (1999), "Macroeconomic Performance and Collective Bargaining: An International Perspective", *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVII, nº 3, pp. 1150-1175.
- Fölster, S., y S. Peltzman (1997), "The Social Cost of Regulation and Lack of Competition in Sweden: A Summary", en Freeman *et alia*, pp. 305-352.
- Freeman, Richard (1971), *The Labor Market for College-Trained Manpower*, Harvard University Press, Cambridge, MA. (Una síntesis ulterior en castellano puede verse en: *Mercados de trabajo en acción*, MTSS, 1994 pp. 45-81).
- _____, _____ (1996/7), "Solving the New Inequality", Boston Review, XXI, nº 6, (diciembre/enero), pp. 3-10. Recogido en J. Cohen y J. Rogers (eds.) *The New Inequality: Creating Solutions for Poor Americans*, Boston, Beacon Press, series: New Democracy Forum, 1999.
- _____, _____, R. Topel y B. Swedenborg (1997), *The Welfare State in Transition. Reforming the Swedish Model*, The University of Chicago Press.
- Gangl, Markus (2003), "The Only Way is Up? Employment Protection and Job Mobility among Recent Entrants to the European Labour Markets", *European Sociological Review*, vol. 5, nº 5, diciembre, pp. 429-49.
- García Díez, Susana (2003), *Análisis socioeconómico de la estructura productiva de los hogares*, Madrid, CES, Estudios.
- Giddens, Anthony (1994), "Vivir en una Sociedad Postradicional", Cap. 2 de U. Beck, A. Giddens y S. Lash, *Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno*, Alianza Universidad, 1997, (1ª ed. Blackwell: 1994)
- Habermas, Jürgen (1996), *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, MIT Press, Cambridge, Mass. (versión española: Trotta, 1998).
- Hakim, Catherine (2000), *Work-Lifestyle Choices in the 21st Century: Preference Theory*, Oxford University Press.
- _____, _____ (2002), "Lifestyle Preferences as Determinants of Women's Differentiated Labour Market Careers", *Work and Occupations*, nº 29, pp. 428-459.
- _____, _____ (2003), "Public Morality Versus Personal Choice: The Failure of Social Attitude Surveys", *The British Journal of Sociology*, vol. 54, nº 3, Septiembre, pp. 339-45.
- Haller, Max (2002), "Theory and Method in the Comparative Study of Values. Critique and Alternative to Inglehart", *European Sociological Review*, v. 18, nº 2, junio, pp. 139-158.
- Hassel, Anke (2003), "The Politics of Social Pacts", *British Journal of Industrial Relations*, vol. 41, nº 4, diciembre, pp. 707-726.
- Hassler, John, José V. Rodríguez-Mora, Kjetil Storesletten y Fabrizio Zilibotti (2001), "The Survival of the Welfare State", IIES, Stockholm University, Seminar Paper nº 704, disponible en: <http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/704.pdf>.
- Herce, José. A. y Víctor Pérez-Díaz (1995), *La reforma del sistema público de pensiones en España*, Servicio de Estudios de "La Caixa", Colección de Estudios e Informes, nº 4.
- Hernanz Martín, Virginia (2003), *El trabajo temporal y la segmentación. Un estudio de las transiciones laborales*, CES.
- Hull, Carls y Stefan Svalfors (2002), "Production Regimes and Work Orientations: A Comparison of Six Western Countries", *European Sociological Review*, v. 18, nº 3, septiembre, pp. 315-331.
- INE (2004) *Revisión del padrón municipal 2003. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia*:
<http://www.ine.es/inebase/cgi/um?L=&N=&O=pcaxis&M=%2Ft20%2Fe245%2Fp04%2Fa2003>.
- Inglehart, R. (1990), *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, Princeton University Press.

- Knoblauch, Vicki (2001), "Using Elections to Represent Preferences", *Social Choice and Welfare*, vol. 18, issue 4, pp. 823-831.
- Korpi, Walter (1978), *The Working Class in Welfare Capitalism*, Routledge Kegan & Paul.
- _____, _____ (1998), "Power Resources Approach vs. Action and Conflict: On Causal and Intentional Explanations in the Study of Power", en J.S. O'Connor, G.M. Olsen (eds.), *Power Resource and the Welfare State: A Critical Approach*, Univ. of Toronto Press.
- Lesthaeghe, R y Neels, K (2002), "From the First to the Second Demographic Transition: An Interpretation of the Spatial Continuity of Demographic Innovation in France, Belgium and Switzerland", *European Journal of Population*, Vol.18, nº 4, pp 325-360, disponible en <http://www.vub.ac.be/SOCO/demo/papersonline/EJP1to2demtransall.pdf>.
- Lindbeck, Assar (2003a), "Improving the Performance of the European Social Model – The Welfare State over the Life Cycle", Seminar Paper nº 717, IIES, Stockholm, febrero, disponible en: <http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/717.pdf>.
- _____, _____ (2003b), "An Essay on Welfare State Dynamics", Seminar Paper nº 719, IIES, Stockholm, mayo, en: <http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/719.pdf>.
- _____, _____, y Sten Nyberg (2001), "Raising Children to Work Hard: Altruism, Work Norms and Social Insurance", Research Papers in Economics, Stockholm University, Dep. of Economics, nº 2001.5: http://econpapers.hhs.se/paper/hhssunrpe/2001_5f0005.htm.
- _____, _____ y Mats Persson (2003), "The Gains from Pension Reform", *Journal of Economic Literature*, Vol. 41, nº 1, marzo, (Seminar Paper Nº. 712, IIES, Stockholm, agosto 2002, disponible en: <http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/712.pdf>).
- Linos, Katerina (2004), "How Can International Organizations Shape National Welfare States? Evidence from Compliance with EU Directives", *Center for European Studies Working Paper No. 107*: http://www.ces.fas.harvard.edu/working_papers/LinosCompliance.pdf.
- _____, _____ y Martin West (2003), "Self-interest, Social Beliefs, and Attitudes to Redistribution. Re-addressing the Issue of Cross-national Variation", *European Sociological Review*, vol 19, nº 4, septiembre, pp. 393-409.
- Lorente, José Ramón, y Nicolás Carrasco (1986), "Una nota sobre los factores explicativos de la demanda de trabajo", en M.E.H., pp. 335-357.
- Ludlam, Steve, y Andrew Taylor (2003), "The Political Representation of The Labour Interest in Britain", *British Journal of Industrial Relations*, vol. 41, nº 4, diciembre, pp. 727-49.
- March, James y Zur Shapira (1992), "Variable Risk Preferences and the Focus of Attention", *Psychological Review*, vol 99, nº 1, pp. 172-183.
- Marginson, Paul, Keith Sisson y James Arrowsmith (2003), "Between Decentralization and Europeanization: Sectoral Bargaining in Four Countries and Two Sectors", *European Journal of Industrial Relations*, vol. 9, nº 2, julio, pp. 163-187.
- Martínez-Granado, Maite y Javier Ruiz-Castillo (2002), "The Decisions of Spanish Youth: A Cross-section Study", *Journal of Population Economics*, 15, pp. 305-330.
- McRae, Susan (2003), "Constraints and Choices in Mother's Employment Careers: A Consideration of Hakim's Preference Theory", *The British Journal of Sociology*, vol. 54, nº 3, septiembre, pp.317-38.
- M.E.H. (1986), *Tendencias demográficas y planificación económica*, Ministerio de Economía y Hacienda, España.
- Miguel, Carmen de, e Isabel Agüero (1986), "Evolución demográfica y oferta de fuerza de trabajo", en M.E.H., pp. 277-334.
- Minkins, Lewis (1991), *Contentious Alliance*, Edinburgh University Press.
- Moreno, Luis (2000), *Ciudadanos precarios. La "última red" de protección social*, Ariel sociología.

- Mouffe, Chantal (2000a), *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Institute for Advanced Studies (IHS), Viena, Political Science Series, nº 72, 17 pp., disponible en: http://www.findarticles.com/cf_dls/m2267/3_66/58118478/print.jhtml.
- _____, _____ (2000b), *The Democratic Paradox*, Londres-N.York, Verso.
- Naciones Unidas (1993), *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, A/RES/48/10485th, <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>, plenary meeting, 20/XII/1993.
- Norrman, E. y C.E. McLure Jr. (1997), "Tax Policy in Sweden", en Freeman *et alia*, pp. 7-108.
- Olano, Alberto (1986), "La caída actual de la fecundidad: ¿Tendencia secular o fluctuación?", en M.E.H, pp. 77-88.
- OCDE (2004), *Trends in International Migration*, SOPEMI - 2003 Edition.
- Parsons, Talcott (1961), "An Outline of the Social System", en T. Parsons, E. Shils, K.D. Naegle y J.R. Pitts, *Theories of Society. Foundations of Modern Sociological Theory*, The Free Press, N. York, pp. 30-79.
- Persson, Mats (2000), "Five Fallacies in the Social Security Debate", Seminar Paper Nº. 686, IIES, Stockholm, junio, en: <http://econpapers.hhs.se/paper/hhssiessp/0686.htm>.
- Pinker, Steven (2002), *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*, Viking Press.
- Polavieja, Javier G. (2003), "Temporary Contracts and Labour Market Segmentation in Spain: An Employment-Rent Approach", *European Sociological Review*, vol. 19, nº 5, diciembre, pp. 501-17. Síntesis de su obra *Estables y precarios. Desregulación laboral y estratificación social en España*, Monografías CIS, nº 197, octubre 2003.
- Rawls, John (1971), *A Theory of Justice*, Harvard U.P. (version española: FCE, 1979; citada).
- _____, _____ (1988), "The Priority of Right and Ideas of the Good", *Philosophy & Public Affairs*, Otoño, 17 (4), pp. 251-276.
- _____, _____ (1989), "The Domain of the Political and Overlapping Consensus", *New York University Law Review*, Mayo, 64 (2), pp 233-255.
- Regini, Mario (2003), "Tripartite Concertation and Varieties of Capitalism", *European Journal of Industrial Relations*, vol. 9, nº 3, noviembre, pp. 251-263.
- Reher, David Sven, y Fernando González-Quirónes (2003), "Do Parents Really Matter? Child Health and Development in Spain During Demographic Transition", *Population Studies*, vol. 57, nº 1, pp. 63-75, disponible en: <http://taylorandfrancis.metapress.com/media/gmuaadguyr5jreq7ta2w/Contributions/LT/U/Q/LTUQVRHYEQ9HL92R.pdf>.
- Rodríguez Cabrero, Gregorio (2003), Protección social de los inmigrantes extranjeros", Cap. V de: *Inmigración: mercado de trabajo y protección social en España*, Antonio Izquierdo (director), Madrid, CES, Estudios.
- Rodrik, Dani (1998), "Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?", *Journal of Political Economy*, vol. 106, nº 5, octubre, pp. 997-1032.
- Romer, Paul M. (1999) "Conversation with Paul M. Romer", en Brian Snowdon y Howard R. Vane, *Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Rorty, Richard (1994), "Truth without Correspondence to Reality", y "A World without Substances or Essences", recogidos en *Philosophy and Social Hope* (1999), Penguin.
- Rosen, Sherwin (1997), "Public Employment, Taxes and the Welfare State in Sweeden", en Freeman *et alia* (eds).
- Ruyter, Alex de, y John Burgess (2003), "Growing Labour Insecurity in Australia and the UK in the Midst of Job Growth: Beware the Anglo-saxon Model", *European Journal of Industrial Relations*, vol. 9, nº 2, julio, pp. 223-43.
- Saint Paul, Gilles (2002), "The Political Economy of Employment Protection", *Journal of Political Economy*, vol. 110, nº 3, junio, pp. 672-704.

- Sarfati, Hedva (2003), "Welfare and Labour Market Reforms: A New Framework for Social Dialogue and Collective Bargaining", *The European Journal of Industrial Relations*, vol. 9, n° 3, noviembre, pp. 265-282.
- Seiz, Janet A. y Michelle A. Pujol (2000), "Harriet Taylor Mill (HTM)", *The American Economic Review*, Vol. 90, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Twelfth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 2000), pp. 476-479.
- Svallfors, S. (1997), "Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight Nations", *European Sociological Review*, vol. 13, n° 3, diciembre, p. 283-304.
- Traxler, Frank, Sabine Blaschke y Bernhard Kittel (2001), *National Labour Relations in Internationalized Markets: A Comparative Study of Institutions, Change and Performance*, Oxford University Press.
- _____, _____ (2002), "Wage Regulation Between Industrial Democracy and Market Pressures. Towards a European Model?", *European Sociological Review*, vol. 18, n° 1, diciembre, pp. 1-16.
- _____, _____ (2003a), "Bargaining, (De)centralization, Macroeconomic Performance and Control over the Employment Relationship", *British Journal of Industrial Relations*, vol. 41, n° 1, marzo, pp. 1-27.
- _____, _____ (2003b), "Bargaining, State Regulation and the Trajectory of Industrial Relations", *European Journal of Industrial Relations*, vol. 9, n° 2, julio, pp. 141-161.
- Wallerstein, Immanuel (2003), "Citizens All? Citizens Some! The Making of the Citizen", *Comparative Studies in Society and History*, vol. 45, n° 4, octubre, pp. 650-679.
- Watanabe, Rei y Yasushi Ohkusa (2003), "An Analysis of the Price Elasticity of Health-Care Demand for Diabetes Mellitus in Japan", disponible (31-I-2004) en: http://www.esri.go.jp/jp/prj-rc/macro/macro14/08hitotsubashi_t3.pdf.
- Wittgenstein, Ludwig (1998), *Culture and Value*, revised ed. (bilingüe alemán-inglés; trad.: Peter Winch), Oxford, Basil Blackwell.
- Woolf, Virginia [1925], *La Señora Dalloway*, Cátedra, Letras universales, Ed. de María Lozano (2003).